

MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLITICOS EN LOS AÑOS OCHENTA: EN BUSCA DE UNA ALTERNATIVA

*Camilo González Posso**

* *Investigador en el CINEP sobre Movimientos Sociales y Política Internacional. Actualmente es catedrático en la Universidad Nacional de Colombia. Ingeniero, egresado de la Universidad del Valle (1969); especializado en Economía Política, Estudios e Investigación: Universidad Santiago de Cali (1970), CEBRAP, Sao Paulo, Brasil (1978); A.P.I.O. Paris (1981).*

El ensayo de Camilo González aborda la situación de Colombia en los años ochenta, destacando la "tendencia de reorganización del movimiento popular", tanto en las formas y contenidos de la lucha social como en la búsqueda de alternativas políticas. El autor sustenta que en la múltiple crisis del país (social, institucional o de modelos de desarrollo y acumulación), lo central es la pérdida de legitimidad de los gobiernos y del conjunto del sistema político y la búsqueda de una nueva legitimidad e institucionalidad en antagonismo con el orden existente. Para analizar las condiciones de esa búsqueda emprendida desde los sectores populares, González Posso dirige la atención a cuatro temas relacionados: la irrupción del movimiento popular extrainstitucional, el proceso de paz y

el lugar de la guerrilla, el intento de institucionalización desde arriba y la reorganización cívico-popular.

Sobre la misma problemática tratada en "Movimientos sociales y políticos en los años ochenta", Camilo González ha publicado otros ensayos y artículos, entre los que se encuentran: "Movimientos cívicos y poder local", CINEP, Controversia No. 121, Bogotá, 1984; "El Movimiento Popular en Colombia", Ed. ALAI-CINEP, Bogotá, 1985 (Coautor); "Historia de una traición", Ed. Plaza & Janés, Bogotá, 1986, (Colaboración con Laura Restrepo); "Balance del Proceso de Paz", Revista Solidaridad, Varios artículos, Bogotá, 1986.

En Co
organiz
ha sido
mos añ
dancia
cuestió
constru
otros h
organizac
insistien
base o l

Desde
a mirar
sociales
nes ent

La crisi
proceso
mo real
de dete
cencia e
cuerpo
naria.

La situa
demás s
cia a los
volviend
surgimie
damenta

INTRODUCCION

En Colombia, como en América Latina, el desarrollo de las organizaciones sociales y de nuevas formas de acción política, ha sido objeto de investigación y reflexión durante los últimos años. El ángulo de aproximación es múltiple en concordancia con la complejidad del tema. Unos han abordado la cuestión de la configuración de un sujeto histórico capaz de construir una hegemonía alternativa para el cambio social; otros han explorado la significación de los procesos de reorganización para una práctica innovadora de la democracia insistiendo en la democracia participativa, la democracia de base o la construcción del Poder Popular.

Desde otra perspectiva también se han dirigido los análisis a mirar la relación entre estos movimientos u organizaciones sociales y las formas partidistas y, en fin, sobre las relaciones entre la sociedad y el Estado.

La crisis de formaciones políticas tradicionales, lo mismo que procesos como los de Nicaragua o las vicisitudes del "socialismo real", se han proyectado con fuerza en un doble proceso de deterioro de versiones teóricas anquilosadas y en efervescencia en la búsqueda de reelaboraciones que permitan darle cuerpo a concepciones orientadoras de la praxis revolucionaria.

La situación que se está presentando entre los trabajadores y demás sectores populares en Colombia le confiere toda vigencia a los esfuerzos por dilucidar cuestiones básicas como esas, volviendo una y otra vez sobre las posibilidades actuales de surgimiento de una Alternativa Popular para el cambio fundamental que requiere la sociedad colombiana.

Es un hecho reconocido que durante los últimos años, al menos desde los ochenta, se ha producido un reordenamiento en las luchas sociales y políticas. Tal reordenamiento y sus posibilidades en el actual período, es la preocupación de estas anotaciones. Teniendo en cuenta la situación política general de Colombia en el contexto latinoamericano, buscamos interpretar la evolución del movimiento social y la búsqueda de alternativas políticas desde el campo de los trabajadores, admitiendo que es indispensable ver la permanente interacción con las formas de ejercicio del poder.

Las tendencias de la situación colombiana han seguido en esta década las de América Latina, si bien es frecuente que en el escenario internacional se hable de la excepcional estabilidad del sistema político colombiano y hasta se le presenta como modelo de persistencia democrática. La realidad es que detrás de esas frases se encuentra un convulsionado panorama en el que hay una combinación peculiar de componentes comparables a los conflictos centroamericanos o a los del sur del continente.

La onda de "democratización" que recorre América Latina, también involucra este país. Solo que aquí, en el lapso breve 1978-1987, el péndulo ha oscilado entre puntos extremos de menor amplitud que en Nicaragua, Bolivia, Argentina o Perú, pero tal vez con mayor velocidad. Se ha transitado desde la "casi-dictadura" a la apertura democrática y ahora el signo de la oscilación parece dirigirse de nuevo a formas más autoritarias de gobierno y a situaciones más antagónicas de lucha social y política.

LA CRISIS DE LOS OCHENTA Y EL ASCENSO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICOS

El momento actual de reorganización del movimiento obrero y popular en Colombia solo es comprendido si se inscribe en el período más amplio de la situación nacional iniciado a finales de la década del 70, cuando la crisis general del sistema político frentenacionalista¹ adquirió las expresiones más visibles de los últimos tiempos.

1 El Frente Nacional estuvo vigente en Colombia entre 1958 y 1974 con el establecimiento del monopolio Estatal del bipartidismo libe-

Desde
buena
movim
cambi
pos y
nómic
var la in

Estamo
rápidas
reacció
ridades
La tenc
adminis
a que la
social y
en el p
los gobi
las clas
político

El solo
sido rev
diversos
trofe",
plican c
pacífica
"La de
armas p

En toda
vuelto b
sido así
de Som
tes en E
dominar
ran visl
lombia.

ral-cc
denci
trum
rigier

Desde entonces la situación colombiana ha estado signada en buena medida por la tensión producida entre el ascenso del movimiento popular y de una insurgencia que pugnan por cambios fundamentales y, por otro lado, la acción de los grupos y clases dominantes que desde el Estado y el poder económico actúan y redefinen programas para tratar de desactivar la inconformidad y preservar el actual sistema.

Estamos inmersos en un período inestable y convulsivo de rápidas oscilaciones y redefiniciones, en el cual la acción y reacción de fuerzas encontradas no responde solo a peculiaridades nacionales sino a condicionamientos internacionales. La tendencia a la polarización extrema que se abrió desde la administración de Turbay Ayala (1978-1982), ha conllevado a que la posibilidad o inminencia de una profunda explosión social y política, o el dilema de la paz o la guerra, se convierta en el punto de referencia que ordena el comportamiento de los gobiernos, de los aparatos e instituciones del Estado, el de las clases o sectores sociales o el de movimientos y partidos políticos.

El solo lenguaje que articula desde entonces los discursos, ha sido revelador del "estado de ánimo" predominante en los diversos ámbitos de la sociedad: "Institucionalización o catástrofe", dicen unos, "diálogo nacional para salvar al país" replican otros; "apertura o guerra", "o hacemos la revolución pacífica o nos toca padecer la revolución violenta": (Galán); "La democracia sólo será conseguida con las armas", "las armas preservan la democracia. . .".

En toda la última década la vida social y política se ha desenvuelto bajo el síndrome de la "centroamericanización". Ha sido así en especial a partir de 1979, cuando con la derrota de Somoza y con la multiplicación de movimientos insurgentes en El Salvador y Guatemala, la preocupación de las clases dominantes se concentró en los factores internos que pudieran vislumbrar posibilidades de procesos similares en Colombia.

ral-conservador, con la alternación pactada y legalizada en la presidencia de la República y la paridad en los cargos públicos. Los instrumentos más importantes del Frente Nacional han continuado rigiendo no obstante su terminación formal.

Así que insurgencia y contrainsurgencia pasaron a ser los ejes del conjunto de la situación, no obstante que los análisis de los factores en juego no llegaron a constituir ni una situación de guerra generalizada, ni de crisis revolucionaria, ni situación comparable a la de Centroamérica o a la de países como Bolivia o Perú.

Para apreciar esta situación debe tenerse en cuenta que en Colombia se vivió de cerca la derrota de Somoza y el fracaso de la política Carter en América Central. La crisis del sistema de dominación construido por Estados Unidos en América Latina, agudizada desde la derrota de Vietnam, tocó fondo cuando la administración Carter fue incapaz de proteger a sus aliados nicaragüenses para operar el tránsito hacia un "somocismo sin Somoza". El desajuste de los instrumentos de dominio no sólo se hizo sentir en Centroamérica sino en todo el continente y en el terreno concreto de las confrontaciones sociales.

A partir de este momento se planteó un nivel superior de confrontaciones entre luchas de liberación nacional y formas de sometimiento, entre dictaduras o semidictaduras y movimientos por la democracia. El final de la administración Carter, y de manera más coherente el gobierno Reagan, definieron una contraofensiva global que influye desde entonces en mayor o menor medida en el comportamiento de los gobiernos, según las características que presenten los procesos internos. En todo caso, la posibilidad de revoluciones se convirtió en el elemento clave tanto en el campo popular como en las esferas del poder.

Teóricos tan lucidos como Kissinger o Richard Nixon, han señalado insistentemente esta cuestión que muchas veces se deja de lado o se considera disquisición esotérica. El Informe de la Comisión Bipartidista, formada por Reagan en 1983 bajo la presidencia de H. Kissinger, comienza ubicando los grandes "desafíos"; el primero lo encuentra en la crisis económica que con sus consecuencias lesivas conforma las condiciones propicias para el descontento. La recesión de la economía mundial; se ve encadenada en el Informe al agravamiento en América Latina del problema de la deuda externa, a la restricción del gasto público, a la devaluación o al incremento de las tasas de interés. La consecuencia inmediata ha sido el de-

terio
todas
el "d
ne e
palab
casi t
nes s
ser es
forma
lugar
Carib

La in
sis, ha
na. El

1. Ap
inic
198
dic
zo
per
fue
trin
ma
la t
gen
el p
no,
tod
incc
de c
quie
bipa

Corr
mov
dias

2 En
Cor
Noi

terio de los niveles de vida, el aumento del desempleo y de todas las expresiones de la pobreza. Este primer problema y el "desafío" que implica se vincula con el segundo que deviene en el más importante: *la legitimidad de los gobiernos*. En palabras del Informe "Fuerzas poderosas están avanzando en casi todos los países del hemisferio, probando cómo las naciones se han de organizar y bajo qué procesos la autoridad debe ser establecida y legitimizada. Quién va a gobernar y bajo qué formas, es el tema central en el proceso de cambios que tiene lugar ahora en país tras país a través de América Latina y el Caribe"².

La inestabilidad gubernamental y el enfrentamiento a la crisis, ha sido también la característica de la situación colombiana. En este período se pueden distinguir tres fases:

1. Apertura de la crisis y polarización externa. Esta fase se inició con la administración Turbay y se prolongó hasta 1982. El Gobierno asumió tempranamente características dictatoriales y la crisis del régimen frentenacionalista se hizo palpable de múltiples maneras. El Estado de sitio casi permanente se reveló insuficiente para mantener el orden y fue complementado con el Estatuto de Seguridad; la Doctrina de la Seguridad Nacional se convirtió en cartillas o manuales de operación cotidiana de las Fuerzas Armadas; la tortura, las detenciones en masa, el tratamiento de insurgentes a los inconformes por la situación socioeconómica, el peso decisivo de los militares en el gabinete de Gobierno, en la Justicia y, por supuesto, en la guarda del orden, todo esto dio cuerpo a una dictadura apenas distrajada o incompleta solo por la tradicional costumbre colombiana de darle marco jurídico a cualquier frase de poder o a cualquier arbitrariedad, o por la continuidad de la presencia del bipartidismo o de un Parlamento de segunda categoría.

Como reacción a la "dictadura disfrazada" se desató un movimiento democrático de gran amplitud. Las clases medias viraron a la oposición, el descrédito del partido del

2 En el Informe Kissinger se desarrolla ampliamente esta tesis. Ver Comisión Nacional Bipartidista sobre Centroamérica. Editorial Norma, Cali, 1984, pág. 13.

presidente se acentuó y la protesta obrera popular fue abriéndose camino no obstante el terror y la arbitrariedad. En ese contexto, en el que la recesión económica y la adopción del credo neoliberal alimentan el conflicto, se ubica el ascenso del movimiento de masas que se hizo notable desde 1981 y se inscribe también en el fortalecimiento de la insurgencia que se presenta como abanderada del cambio social y como "democracia en armas".

2. La segunda fase, dominada por el "Proceso de Paz", se inició con la administración Betancur y llega hasta la ruptura del Diálogo Nacional. Ante el avance de la protesta social y del movimiento armado, y ante el fracaso de la política represiva, se impuso, la política de "acuerdo nacional" y semidemocracia, para tratar de asimilar el descontento y desactivar la "bomba de tiempo" de la que hablara Betancur durante su campaña. Tres elementos marcaron esta fase: la resistencia de los sectores populares a la política anticrisis que desde el gobierno buscaba imponer el "ajuste" según los lineamientos del FMI y del Banco Mundial; en segundo lugar el desarrollo de la negociación política entre el gobierno y las organizaciones guerrilleras que se desarrolló en dos planos distintos, por un lado el Diálogo Nacional con el M-19 y el EPL, y por otro lado la Tregua o Cese al fuego con las FARC; el tercer elemento fue la continuidad, adoptada a la nueva situación y a las presiones de apertura política, de la estrategia de modernización del Estado o institucionalización promovida por las Fuerzas más dinámicas de los partidos tradicionales y de la burguesía desde las postrimerías del Frente Nacional.

El ascenso del movimiento social y la confluencia que se registró con la guerrilla en tregua, tuvo expresiones inéditas y llegó hasta el Paro Cívico Nacional de junio de 1985. Este excepcional proceso tendrá que ser analizado una y otra vez, pues colocó en tensión a todos los actores políticos y sociales y mostró los límites de tolerancia tanto de las instituciones del sistema como de las contradicciones de la sociedad entera.

3. La tercera fase se inició con la ruptura del Diálogo Nacional y se mostró con todos sus ingredientes desde la masacre del Palacio de Justicia para continuar durante la administración Barco. La tendencia a la polarización y militariza-

ción de la situación general del país, vuelve a acentuarse ante el fracaso del Diálogo Nacional y las crecientes dificultades de la Tregua prolongada con las FARC. La institucionalización vertical, impuesta por el bipardismo y administrada por el gobierno liberal, se convierte en la pieza clave del ejercicio del poder y de los planes contrainsurgentes o de "normalización". El efecto inmediato de la ruptura del Diálogo y de la reanudación de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y la CNG, ha sido la bifurcación de la dinámica del movimiento social y la de los grupos insurgentes. En una situación nueva continúa la pugna entre las fuerzas rebeldes y las que buscan estabilizar la situación.

Tomando en cuenta esta periodización, vamos a referirnos a los elementos más destacados que sirven para ubicar la reorganización del movimiento social que está en curso. No es nuestra intención analizar cada una de las fases mencionadas, ni establecer las relaciones causales o determinaciones de los principales acontecimientos. *Nos limitamos a abordar aspectos que son indispensables para dilucidar las tendencias actuales del movimiento de masas. Por esto nos referimos: uno, al desarrollo extrainstitucional del movimiento social; dos, a las repercusiones del proceso de paz y al lugar de la guerrilla; tres, al impacto de la apertura e institucionalización y cuatro, a las formas más recientes de unificación y coordinación en el movimiento obrero y popular.*

ncia que se
ones inédi-
o de 1985.
zado una y
ctores poli-
cia tanto de
radiciones

logo Nacio-
la masacre
la adminis-
militariza-

I

MOVIMIENTO SOCIAL EXTRA-INSTITUCIONAL

El ex procurador de la República Carlos Jiménez Gómez, utilizó una expresión muy gráfica para denominar las características del movimiento social que bajo diversas formas se ha venido desarrollando en estos años ochenta. Habló del "enguerillamiento" aludiendo a las formas que asume la protesta. Las situaciones de hecho, los actos de fuerza, el enfrentamiento físico, los cauces extrainstitucionales, se convirtieron en parte natural de la expresión de inconformidad y de relación con el Estado.

Entre las nuevas formas de la lucha social se han destacado los paros cívicos que se han multiplicado en municipios o regiones y que a escala nacional se presentaron en 1977, 1981 y el último en 1985. A partir de 1981 fue notable el incremento de esos paros y de los movimientos cívicos que los acompañan o que simplemente amenazan con hacerlos. Sólo entre enero de 1982 y marzo de 1984 se involucraron más municipios en paros cívicos de los que se cuentan para la década 1971-1981³. Los datos de Javier Giraldo y Santiago Camargo muestran que mientras en las décadas anteriores se presentaron 7 paros por año, durante el cuatrenio de Betancur se registraron 24 por año en promedio⁴. En lo que va desde principios de la década del ochenta al paro cívico na-

3 GONZALEZ, Camilo, *El Movimiento Popular en Colombia*. Editado por ALAI-CINEP, Serie de Documentación Política, Vol. III, No. 3, Bogotá, junio de 1985.

4 GIRALDO, Javier y CAMARGO, Santiago, "Contradicciones sociales en torno al equipamiento urbano", en Revista *¿Qué pasó?*, Coyuntura Trimestral, año 4, No. 14, CINEP, septiembre de 1986.

cional
cerca
cerca e

El "en
to una
ros y
motiva
tarifas
que a
paros
una ac
genera
bierno
tación

El paro
fica la
ella a s
cho. E
vías o
cas y s
miento
racteri
El Tien
cívicos
asonad
tener e
adquie
mente
violenc

De ma
popula
nemos
tramos
ir de o
"hay q
las". E
dores i

5 Edit

cional de 1985, puede estimarse que sin incluir este último, cerca de 7.000.000 de personas participaron o siguieron de cerca esta experiencia de lucha.

El "enguerrillamiento" del que habla Jiménez Gómez es tanto una forma de acción como una "cultura popular". Los paros y movimientos cívicos locales o regionales, han estado motivados por la carencia de servicios públicos, por alza de tarifas o desatención a necesidades regionales. Lo notable es que a partir de estas demandas inmediatas los movimientos y paros cívicos involucran a amplios sectores de la población en una acción pluriclasista que desde el mismo diseño supone la generación de un acto de fuerza fuera de toda ley, ante el Gobierno central o las entidades más comprometidas con la prestación de los servicios.

El paro cívico, por mínimo que sea el punto de partida, significa la disposición de una población o parte considerable de ella a someter al Estado a un reto creando situaciones de hecho. En casi todos los casos está acompañado de bloqueo de vías o de calles, de ocupación de edificios de entidades públicas y son muchos los casos en los cuales se llega al enfrentamiento directo con la fuerza pública. Percatándose de esas características, un prestigioso vocero de la derecha, el diario *El Tiempo*, afirmaba en 1983: "Definitivamente estos paros cívicos llevan implícito un germen que ha de convertirlos en asonadas, con la natural intervención de la policía para mantener el orden público. Pero también nuestro tropicalismo no adquiere experiencias en este género de protestas aparentemente pacíficas que en cualquier momento se convierten en violencia ciudadana"⁵.

De manera que *el paro cívico es la expresión de una "cultura popular de la situación de hecho"*: "Para que nos atiendan tenemos que hacernos sentir", "si no tenemos fuerza y la mostramos nos aplican el mamagallismo burocrático", "es inútil ir de oficina en oficina con papeles por los canales regulares", "hay que pegarles donde les duela para que nos pongan bolas". El lenguaje corriente de los pobladores o de los trabajadores indica la desconfianza generalizada ante el funciona-

5 Editorial de *El Tiempo*.

miento de las instituciones o los cauces tradicionales de relación de las comunidades con el Estado y en contrapartida la tendencia a "hacerse sentir", a la constitución de poderes propios que obliguen al Gobierno a reconocerlos como interlocutores. Se trata de embrionarias expresiones de poder popular extrainstitucionales, mezcladas con la vieja costumbre de negociar con el Estado a partir de "feudos clientelistas".

La importancia de estos movimientos y su renovada incidencia en el país desde finales del gobierno de Turbay Ayala, no depende tanto del tipo de demandas o del contenido político que asume, como de la forma de lucha o de organización y de la quiebra de hecho del marco institucional. El carácter fraccionado de este movimiento y la inestabilidad o falta de continuidad de muchas de estas acciones locales no le resta significación.

Esa crisis institucional es puesta en evidencia por muchas otras expresiones de la movilización popular. *Indisolublemente ligado a los movimientos cívicos se ubica el desarrollo reciente de la lucha indígena y campesina por la tierra y por la prestación de servicios por parte del Estado.* Entre 1981 y 1984 la toma de tierras —o "recuperación" como dicen los indígenas—, superó las 80.000 hectáreas con la participación de 13.000 familias en 68 municipios pertenecientes a 16 departamentos, sin contar las áreas de colonización. La lucha indígena por la recuperación de sus resguardos ha sido puntal del repunte de la movilización campesina que marca esta década. Indígenas y campesinos han estado vinculados a los Paros cívicos especialmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, sur del Tolima, Magdalena Medio y sur de los departamentos de Bolívar, Sucre y Magdalena.

Las formas de acción del campesinado han involucrado, además de la ocupación de hecho de predios y de los paros cívicos, el bloqueo de carreteras y las marchas. Esta última modalidad de LA MARCHA se ha convertido en una de las formas más dinámicas de movilización social y política; se trata de manifestaciones contra la violencia oficial y por demandas regionales en las cuales se opera el desplazamiento de millares de campesinos en caminatas por veredas y carreteras que van vinculando nuevas fuerzas en dirección a la capital departamental o a una población de importancia en la región. La segunda etapa de La Marcha es la ocupación de un sitio im-

portar
que s
convic
al go
ción e

En el
tucion
te. Al
de los
o de a
trienio
mientr
apenas
estas c
conver
se dest
guístic
a pesar
gas y e
de la l
digo S
lud, en
tales, c
chos si
auge de
vo que
no hay
carácter

La quir
de prot
con el
a cond
dos cor
puestal
mediata
más del
ción, a

6 Dato
cío
"Sin

portante en el centro urbano de modo que el campamento que se establece allí durante varios días y hasta semanas, se convierte en una tribuna de repercusión nacional que obliga al gobierno y a toda la opinión pública a concentrar la atención en los problemas planteados.

En el movimiento obrero este fenómeno de lucha extrainstitucional ha estado más mediado, pero no deja de ser relevante. Al comenzar la década también se reanimó la lucha social de los trabajadores asalariados por medio de los sindicatos o de agrupaciones clasistas. El número de huelgas en el cuatrienio 1981-1984 fue de 428 y de huelguistas 3.000.000, mientras que en el cuatrienio anterior 1977-1980, había sido apenas de 272 huelgas y 980.000 huelguistas. Pero aparte de estas cifras y del mayor peso de las huelgas por violación de convenciones o del incremento de las huelgas de solidaridad, se destaca el que la inmensa mayoría del movimiento huelguístico se haga por fuera de los marcos legales existentes y a pesar de ellos. Entre 1981 y 1984 más del 55% de las huelgas y el 90% de los huelguistas realizaron sus luchas por fuera de la ley, a pesar de las prohibiciones establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. Maestros, trabajadores de la salud, empleados de la rama judicial y de otras entidades estatales, carentes de derecho a la huelga y con recortados derechos sindicales fueron los protagonistas principales de este auge de las luchas de los asalariados. No es menos significativo que el 84.8% de los huelguistas del período considerado no hayan estado enmarcados en ninguna de las centrales de carácter nacional entonces existentes⁶.

La quinta parte de esos conflictos se presentaron por razones de protesta política y en el conjunto la tendencia al choque con el Gobierno ha sido constante. Los problemas vinculados a condiciones de trabajo aparecieron directamente relacionados con los de la política económica, con el manejo presupuestal o la incidencia de la deuda externa. Este contenido inmediatamente político se ha traducido también en que además del paro se haya recorrido corrientemente a la movilización, a las marchas hacia Bogotá o a las principales capitales,

6 Datos elaborados tomando como base las series elaboradas por Rocio Londoño, Orlando Grisales y Alvaro Delgado en su estudio "Sindicalismo y empleo", mimeo, Bogotá, julio de 1986.

tal como hacen los maestros. La ocupación frecuente de edificios públicos, denotan que este sector de los asalariados no es ajeno a esa "cultura popular de las situaciones de hecho".

Menor presencia ha tenido el proletariado fabril, no obstante que continúa pesando el 26% en el número de huelgas sucedidas en el primer cuatrienio de los años ochenta. Comparado con el período anterior, se aprecia un relativo estancamiento. Esta situación se explica en parte por el impacto de la recesión y la "desindustrialización" que llegan a un punto crítico favorable a la desmoralización o la pérdida de capacidad negociadora de los sindicatos; pero en lo fundamental se debe a la mayor capacidad de control ejercida por aparatos tradicionales y burocráticos del sindicalismo colombiano y por la política de pacto social asumida por las direcciones sindicales ante la política de ajuste del gobierno.

Pero las limitaciones del proletariado fabril, si bien son limitaciones del conjunto de las luchas, no desvirtúan el que ha estado en desarrollo un movimiento social explosivo con repercusiones a todos los niveles. Y así como sus propiedades son atendidas con cuidado por los preocupados ideólogos del sistema, también lo son en la búsqueda de alternativas de poder.

EL MOVIMIENTO POLITICO. LOS PARTIDOS Y LA GUERRILLA

Las luchas sociales multiplicadas desde principios de esta década se sustentaron en organismos no partidistas, de denominación cívica, indígena, campesina o sindical, atendiendo a la ubicación espacial o a relaciones sociales sectoriales. Este hecho indicativo no se contrapone al carácter político de esos movimientos, luchas u organizaciones sociales, que de manera expresa o semiconsciente se plantean la necesidad de un cambio en las instituciones, en el Estado o al menos en las formas de ejercicio del poder.

En la medida en que se dan niveles superiores de acción y coordinación, pasando de lo barrial o veredal a lo zonal o regional, de la empresa a la rama y de estas instancias a lo nacional, las formulaciones políticas alternativas aparecen explícitas. Desde la escala local a la nacional se trata de formas de

fren
rede
En

res
ralm
polí
les
y nú
dina
voce
gran
viliz

Esta
tico,
nació
ha p
masa
cales
de o
do u
movi
noci
signi
dad c

Exist
que
ocher
izqui

El sis
te dé
des y
tribus
A est
mism
fiscal
públi
las vi
en pr
social
mono
forzac

frente único a las que concurren diversos sectores sociales alrededor de propuestas de acción y plataformas inmediatas. En lo organizativo, las juntas cívicas, coordinadoras populares, guardias cívicas o comités de unidad, son instancias generalmente transitorias a las cuales han concurrido corrientes políticas, agrupaciones partidistas, al tiempo que líderes locales o de sector social. Muy frecuentemente son los activistas y núcleos de izquierda los que animan los organismos de coordinación y acción y logran legitimar su liderazgo no en tanto voceros de determinada posición ideológica, partidista o programática, sino en tanto integrantes y promotores de la movilización social.

Esta articulación entre movimiento social y movimiento político, organización social y organización política, lucha local y nacional, reivindicación parcial y enfrentamiento al Estado, ha permitido la multiplicación de la capacidad de acción de masas de los activistas más radicales, de núcleos políticos locales que se definen de izquierda o democráticos e incluso de organizaciones nacionales; al mismo tiempo se ha registrado una suerte de subsunción de las formas partidarias en el movimiento social, que se acompaña de la carencia de reconocimiento en cuanto tales. Para algunas organizaciones esto significa otro indicador de su crisis; para otras es una modalidad distinta de compenetración con el movimiento de masas.

Existen, en todo caso, elementos suficientes para demostrar que el ascenso del movimiento social y político de los años ochenta plantea la crisis simultánea del bipartidismo y de la izquierda tradicional.

El sistema clientelista liberal-conservador, que ha sido durante décadas la forma más habitual de relación de las comunidades y grupos sociales con el Estado, se ve debilitado en la distribución de prebendas o canalización de recursos estatales. A esta situación contribuyó el desarrollo del militarismo, lo mismo que la recesión económica y sus secuelas en el déficit fiscal, en el endeudamiento y el ajuste que limitaron el gasto público. Sin embargo, la crisis relativa del bipartidismo y de las viejas estructuras de los partidos tradicionales se sustenta en procesos más de fondo que conducen a su pérdida de base social y de adhesiones ideológicas. El control compartido y monopolista del Gobierno y de las instituciones estatales, reforzado con el Frente Nacional (1958-1974), contribuyó a

borrar las fronteras programáticas; las responsabilidades de ejercicio del poder desgastan a unos y otros y la capacidad de sustentarse recae cada vez más en el control del aparato burocrático del Estado.

La existencia política de estos partidos se reduce entonces al terreno electoral y a su capacidad de distribución o de sustentación de empleos o partidas presupuestales. La tradicional adhesión partidista entró en crisis desde finales del Frente Nacional, como lo mostró la ANAPO, y sectores considerables pasaron a constituir esa "franja" de los sin partido o a configurar la "descreída indocilidad colombiana"⁷, la indiferencia ante las instituciones y partidos del orden con una abstención que oscila entre el 50 y el 60 por ciento del potencial votante.

La crisis del bipartidismo, si bien incide en el movimiento social y en el desarrollo de formas extrainstitucionales de acción, no ha estado acompañada del desarrollo de partidos o movimientos políticos que sean reconocidos por las masas como instrumentos para la búsqueda de sus aspiraciones inmediatas o fundamentales. La incredulidad con las instituciones y partidos tradicionales, no es superada en el terreno electoral por la presencia de organizaciones o frentes de izquierda. En las elecciones presidenciales de 1974 la UNO, Unión Nacional de Oposición, encabezada por el PC (prosoviético) y el MOIR (maoísta), logró el 4% y esa cifra record solo se volvió a repetir hasta 1986; en 1978 la izquierda sumó 2.1% de los votos y en 1982 cayó a 1.5%⁸.

Las organizaciones de izquierda vinculadas a los llamados "modelos del socialismo realmente existente" sufrieron los efectos de la pérdida de credibilidad de esos sistemas políticos no-capitalistas y las consecuencias de la subestimación del proceso social en desarrollo. Otros intentos centristas o nacionalistas que se proyectaron en el dominio institucional en los años 70, tampoco tuvieron espacio y su crisis fue más evidente.

7 ROJAS, Fernando, "La descreída indocilidad colombiana", Revista *¿Qué pasó?*, CINEP, Bogotá.

8 GONZALEZ, Camilo, "Las elecciones presidenciales de 1986", Revista *Debate*, No. 2, Bogotá, junio de 1986.

No es
una a
quiero
conj
el aug
desarr
y en e

LA GU

Siguien
dicion
guerril
misma
mas de
y popu

Los pa
ferido
vincula
guerril
Moscú
yes, ha
lógica,
tencias,
llera en
servado
tencia
les, cor
clima fi
viética
para ga
primer
no de T
ángulo
segundo

9 LAN
Mede

10 Belis
y cau

No es extraño que la crisis del bipartidismo y la ausencia de una alternativa política desde el movimiento obrero o de izquierda, hayan interactuado como un elemento dentro del conjunto de circunstancias y determinaciones que explican el auge de la acción extrainstitucional de protesta social o el desarrollo de la guerrilla durante el gobierno de Turbay Ayala y en estos años ochenta.

LA GUERRILLA

Siguiendo esta línea de análisis puede suponerse que las condiciones que permitieron el crecimiento sin precedentes de la guerrilla colombiana en este período son en buena parte las mismas que, en otro terreno, explican el ascenso de las formas de acción social extrainstitucional de los sectores obreros y populares.

Los partidarios de la Teoría de la Seguridad Nacional han preferido darle primacía a la injerencia internacional de aparatos vinculados a la llamada confrontación Este-Oeste; así que la guerrilla sería la punta de lanza del comunismo dirigido desde Moscú y La Habana. El general(r) Fernando Landazábal Reyes, ha indicado que se trata de una forma de "violencia ideológica, auspiciada por el enfrentamiento entre las grandes potencias, cuyas consecuencias se concretan en la acción guerrillera en nuestros campos y ciudades"⁹. Las variantes no-conservadoras y corrientes liberales parten de reconocer la existencia de condiciones económicas y de carencias institucionales, como punto de partida para explicar la existencia de un clima favorable a procesos revolucionarios; la intervención soviética o cubana sería un hecho "posterior" de oportunismo para ganar áreas de influencia en la pugna con occidente. El primer enfoque fue el que tuvo mayor peso durante el gobierno de Turbay Ayala, mientras que con Belisario Betancur el ángulo de interpretación gubernamental se trasladó hacia el segundo¹⁰.

9 LANDAZABAL, Fernando, *Conflicto social*, Editorial Beta S.A., Medellín, julio de 1982, pág. 12.

10 Belisario Betancur utilizó el esquema de diferencia causas objetivas, y causas subjetivas.

Desde otra perspectiva el auge de la guerrilla colombiana habría que explicarlo teniendo en cuenta factores históricos del "aprendizaje" político del pueblo colombiano desde la no muy lejana guerra civil de los años cincuenta, factores estructurales y coyunturales que enmarcan la crisis del sistema y de las instituciones y por supuesto los factores llamados subjetivos que se concretan en niveles de conciencia, organización político-militar, definiciones tácticas y estratégicas y apoyos internos y externos. Tomando solo los elementos más inmediatos la multiplicación de la guerrilla en los años ochenta demandaría tener en cuenta:

- El descrédito de un gobierno dictatorial como el de Turbay y del sistema político antidemocrático heredado del Frente Nacional.
- Las condiciones de aguda recesión económica y la aplicación de una política estatal y patronal que aún en momentos de recuperación golpea duramente a las mayorías populares.
- El desarrollo explosivo de la movilización social por fuera de las instituciones.
- El debilitamiento del sistema de dominación o de la hegemonía de los Estados Unidos y la influencia de la revolución centroamericana.
- El efecto ideológico del derrocamiento de la dictadura de Somoza y de la destrucción de su ejército (GN), como resultado de una insurrección popular comandada por una organización que combinó la lucha guerrillera con la formación de un Ejército Popular y con el levantamiento insurreccional.
- Existencia de organizaciones guerrilleras con más de una década de experiencias (FARC, ELN, M-19, EPL), que contaban con cuadros de dirección, estructuras, zonas de influencia y reorientación político-militar.
- La ruptura de relaciones de la administración Turbay con Cuba y el aislamiento internacional de ese gobierno a raíz de la traición a la solidaridad latinoamericana cuando la

ag
lla
Pero
sufic
nació
gua.
rio y
repla
respe
con l
de lo
car e
autoc
vo in
hacia

Si se
guerr
como
tica";
mome
milita
la acc
vida e
cionar
dia en
nes so
Tregua

Cuand
de todo
en desi
socieda
se puec
había c
influen
propaga
no obst
En poc
habían
que se
daban s
desmint

agresión en las Malvinas, influyó permitiéndole a la guerrilla ampliar su "retaguardia internacional".

Pero ninguno de estos elementos, ni ellos de conjunto serían suficientes para explicar el por qué de la presencia política nacional de la guerrilla en esa primera fase que lleva a la Tregua. Un aspecto central fue el perfil nacionalista revolucionario y democrático que asumieron, especialmente el M-19, el replanteamiento, al menos en la forma de presentación, con respecto al "marxismo soviético" y la proyección política con la bandera de la democracia. Por otro lado, desde finales de los años 70 las organizaciones armadas definieron modificar el planteamiento tradicional de la guerra de guerrillas de autodefensa o de hostigamiento y se plantearon como objetivo inmediato la formación de un Ejército Popular orientado hacia los centros fundamentales de la vida nacional.

Si se quisiera resumir en unas frases la táctica aplicada por la guerrilla al comenzar la década, se encontrarían expresiones como las siguientes: "Los fusiles son autoparlantes de la política"; "la guerrilla es la democracia en armas"; "la tarea del momento es pasar de guerrilla a ejército y concentrar fuerzas militares contra el tronco de las Fuerzas Armadas"; "dirigir la acción político-militar a los centros fundamentales de la vida económica, social y política del país"; "la lucha revolucionaria es una fiesta a la colombiana"; "hay que ser vanguardia en la búsqueda de una solución de paz con transformaciones sociales" lo que se expresó en la propuesta de amnistía, Tregua y Diálogo Nacional.

Cuando la cuestión de la paz se convirtió en el tema político de todos los discursos era porque la guerra ya era una realidad en desarrollo y amenazaba con invadir todo el cuerpo de la sociedad. Las cifras no son lo más concluyente, pero tampoco se pueden despreciar como indicadores. Para 1982 el M-19 se había convertido en un movimiento de prestigio nacional con influencia en los centros urbanos y se proponía pasar de la propaganda armada a la guerra de guerrillas y a un Ejército, no obstante tener la mayor parte de la dirección en la cárcel. En pocos años las FARC habían pasado de 17 a 27 frentes y habían duplicado sus efectivos en armas. El EPL y el ELN que se habían visto menguadas durante los años 70 también daban signos de reposición. Por estas circunstancias nadie desmintió al general Landazábal cuando advirtió que la sub-

versión contaba con cerca de 17.000 hombres en guerra contra el establecimiento. Y lo más preocupante para él y para los principales dirigentes liberales y conservadores era que la sintonía entre inconformidad, protesta social y movimiento armado no se lograba eliminar con la táctica de tierra arrasada de Turbaya Ayala y su ministro militar Camacho Leyva.

La presencia de la guerrilla en la lucha política y militar en esta década pasó a ser un factor de peso cuya incidencia se registra en muchos aspectos ideológicos, organizativos y de acción de las luchas populares. No es por azar entonces que el denominado "Proceso de Paz" iniciado con las negociaciones entre los alzados en armas y el Gobierno, se haya convertido en eje de la evolución política entre 1982 y 1987.

Cua
lista
cias
para
mien
años
aper
misr
en s
form
o m
tema

Casi
dura
lítica
obte
tica.
plaza
nal?
un nu
votos

La re
pacio
solo
pieza
teros

II

EL PROCESO DE PAZ Y LAS POSIBILIDADES DE UNA ALTERNATIVA POLITICA

Cuando se inició la Tregua y el Diálogo Nacional muchos analistas coincidieron en señalar que el conjunto de circunstancias integradas en esos hechos multiplicaban las posibilidades para un reordenamiento político y en particular para el surgimiento de nuevos partidos o movimientos de masas. Cuatro años después de iniciado el llamado "proceso de paz y de apertura", los interrogantes continúan planteándose en el mismo terreno pero con renovadas exigencias: ¿Cuál ha sido en suma la incidencia de las negociaciones de paz y de las reformas institucionales en el desarrollo de fuerzas políticas o movimientos sociales alternativos al bipartidismo y al sistema dominante?

Casi todo lo que preveían los expertos y politólogos se dio durante el proceso de paz, pero en materia de opciones políticas en el dominio institucional, solo parcialmente se han obtenido nuevos frutos con la formación de la Unión Patriótica. ¿Qué pasó entonces con las multitudes que llenaron las plazas durante el año de vigencia del pacto de Diálogo Nacional? ¿Por qué el M-19 "desaprovechó" la ocasión de fundar un nuevo partido *con millares y quizá centenares de miles de votos* tal como lo pronosticaban las encuestas?

La respuesta a estos interrogantes forma parte de las preocupaciones actuales en los medios académicos y políticos, no solo como ejercicio de interpretación histórica, sino como pieza clave para apreciar el estado actual y los posibles derroteros del movimiento popular en Colombia.

El "proceso de paz" iniciado cuando el presidente Betancur aceptó, a finales de 1982, entrar a negociar con la guerrilla una amnistía sin condiciones y un pacto de Tregua, es uno de los más excepcionales acontecimientos políticos no solo de Colombia sino de América Latina en esta década. La sola descripción de los hechos muestra la novedad del suceso; el Gobierno acogió como interlocutores a las organizaciones levantadas en armas y después de dos años de conversaciones y batallas se llegó a la firma de tratados de cese al fuego. Con las FARC (pro-soviéticas) se pactó en mayo de 1984 el cese al fuego que sigue vigente iniciado 1987 y con el M-19 (nacionalista) y el EPL (M-L) fue suscrito el acuerdo de Cese al fuego y Diálogo Nacional que estuvo vigente por un año desde agosto de 1984¹¹

A la solución negociada concurrieron los distintos actores con sus propuestas presuntamente encaminadas a salirle al paso a una guerra o a un prolongado período de enfrentamiento, mediante acuerdos en cuanto a cambios institucionales; y de tipo socioeconómico. La fuerza de los acontecimientos en el país y los paradigmas de realidades cercanas había obligado a unos y otros a llegar hasta la mesa de conversaciones y este hecho elemental no podría menos que convertirse en un hito con repercusiones aun no suficientemente sopesadas para lo que queda de este siglo.

Con las negociaciones y la tregua se inició un juego táctico de movimientos encontrados en el cual el objetivo implícitamente identificado por cada una de las partes era disputar la adhesión popular, y ganar legitimidad. Los trofeos eran la bandera de la democracia y de la justicia social y el título de partidario de la paz. Como había dicho Jaime Bateman "el que gané la bandera de la paz, gana la guerra".

La guerrilla había propuesto la amnistía, la tregua y las reformas, como parte de una estrategia político-militar y el gobierno de Belisario Betancur le salió al paso al reto en el mismo terreno y como en juego de poker hizo la primera apuesta: "Todas las garantías de las actuales instituciones

11 En la firma de los acuerdos de tregua participó también el grupo denominado Autodefensa Obrera, ADO.

y otras más si ustedes desmontan las guerrillas, tiran las armas donde puedan y se incorporan a la vida civil”.

En el transcurso de ese proceso de paz la iniciativa ha estado de uno y otro lado en un difícil forcejeo. En el primer momento, que abarca desde las negociaciones de la amnistía a la firma de los acuerdos, es notable el consenso que logró el gobierno y el debilitamiento político de la guerrilla; una vez se firmaron los pactos de tregua y diálogo la iniciativa volvió a tener la insurgencia en receso que amplió considerablemente su audiencia y su relación directa con los sectores populares y, en la fase más reciente, desde la ruptura de diálogo nacional al inicio de la “normalización” del presidente Barco (1986-1990), la guerrilla pierde terreno político, la disputa se agudiza, se hace más compleja y se marcha al cierre total del intento de “solución negociada”.

Durante buena parte de los años 84 y 85 se presentó una peculiar situación de agitación política donde el protagonismo “legal” de la guerrilla llegó a sus formas más amplias. En medio de grandes contradicciones se presentaron acontecimientos inusuales que se movían siempre en el límite de lo tolerable por el orden establecido y por las fuerzas encargadas de sustentarlo. La guerrilla en tregua se volcó a las plazas públicas y a los centros urbanos y las deliberaciones trascendentales sobre el destino del país y del gobierno pasaron a hacerse por fuera de las instancias normales del Parlamento o de los consejos de ministros, para realizarse en comisiones *ad-hoc* que se presentaban como mecanismos más representativos.

Durante esos meses se presentó una de las más grandes movilizaciones políticas de masas por fuera de los cauces bipartidistas y de la izquierda institucional y por fuera de coyunturas electorales. Centenares de miles de personas concurren a las plazas públicas a la convocatoria de los voceros del M-19, del EPL o de las FARC. Esta movilización permitió visualizar la conexión existente entre los movimientos armados y la búsqueda *expectante* de salidas políticas por parte de los sectores más pobres de los centros urbanos y de algunas capas medias. Tal constatación sirvió para que se reafirmara la idea de impulsar un movimiento capaz de romper la hegemonía política del bipartidismo.

El Diálogo Nacional (M-19) y el Acuerdo de cese al fuego (FARC) transcurrieron como procesos paralelos e incluso con tensiones entre sí. El desenlace de uno y otro es resultado de diferencias de concepción de las organizaciones que los promovieron y también del tratamiento diferenciado por parte del Gobierno y de las Fuerzas Armadas en uno y otro caso.

Las FARC pactaron una tregua demandando garantías para su *acción* política con el fin de proyectar un movimiento de masas con un protagonismo central en el Parlamento o de participación en instituciones del Estado. La táctica parece encaminarse a superar esa situación en la cual el Partido Comunista hacía política urbana, sindical y parlamentaria y las FARC acumulaban fuerzas en zonas rurales. Mientras el Partido Comunista se estancaba en sus ámbitos, las FARC ampliaban los suyos y se beneficiaba con la ola ascendente de la "política con armas". La Tregua, como antesala de un tratado de paz apareció como una posibilidad de propiciar un nuevo frente o movimiento político que permitiera un período de lucha por lo que han llamado la "Democracia avanzada" que se materializaría en apertura de la actual "democracia restringida" y en mayor participación popular y de sectores democráticos o de izquierda en las instituciones claves. Todo lo demás podría subordinarse a ese eje dictado tanto por cálculos internos como de la diplomacia internacional en esta zona convulsionada del Caribe y el "patio trasero".

Todos los pasos en el delicado espacio de la tregua fueron condicionados por las FARC a la proyección de la *Unión Patriótica*, que se presentó tempranamente como la propuesta política encaminada a probarse en las elecciones de 1986, como la materialización del acuerdo, y medio de tránsito de la guerrilla hacia su disolución e incorporación a la vida civil. La flexibilidad o "capacidad de aguante" fue definida desde el principio. La tregua no dependería de decenas ni de centenares de muertos eventuales en enfrentamiento con el Ejército o por acción de los paramilitares, tampoco de la permanencia del Estado de sitio ni de la ausencia de compromisos sobre el contenido de las reformas sociales o políticas, ni de la exigencia de reconocimiento de las Fuerzas Armadas oficiales como los únicos legítimos portadores de armas, ni de la continuidad del hostigamiento militar. Por encima de estas consideraciones y situaciones parciales se situó el proyecto de la Unión

Patri
las F

Firm
res y
dades
tían
ra" e
papel
un co
a la v
gobie
cese a
vista
y con
derniz
inequ
ria pa

Ese m
lítica,
trar es
"divisi
vos co
comar
revirti
nistrac
mo la
tos (el
1986.

La rup
ceso d
con el
la que
y el E
condici
Se pac
Nacion
amplios
y polít
la guerr
to popu

Patriótica que sería el cauce para transformar la influencia de las FARC en comités de acción política.

Firmado el acuerdo y dados sus términos institucionalizados y sin otra exigencia para el Gobierno que el cese de hostilidades y las garantías para el tránsito a la vida civil, no existían mayores problemas para que el Gobierno se "atrincherara" en la letra de texto a demandar su cumplimiento. *En los papeles*, los ideólogos de la Tregua Gobierno-FARC, asumieron un compromiso formal de una vía: ir hacia la incorporación a la vida civil y por lo mismo el desmonte de la guerrilla. El gobierno se comprometió con la Amnistía y el indulto, con el cese al fuego y con propiciar reformas que *desde el punto de vista del Ejecutivo* y de las mayorías parlamentarias liberales y conservadoras significaran garantías para la oposición y modernización de las instituciones. La perspectiva delineada fue inequívocamente orientada a la lucha electoral y parlamentaria para los comicios de 1986.

Ese marco inicial de los acuerdos, el giro de la estrategia política, lo mismo que la orientación de las FARC de concentrar esfuerzos en las zonas de colonización manteniendo la "división de áreas" con el Partido Comunista, o con los nuevos comandos de la Unión Patriótica, sin resolverle ni muchos comandantes ni guerrillas cerca de las ciudades, fue lo que se revirtió en la persistencia de la tregua hasta iniciada la administración Barco y en el desarrollo de la Unión Patriótica como la tercera fuerza parlamentaria del país con 350.000 votos (el 4%), 12 congresistas y un centenar de concejales en 1986.

La ruptura del Diálogo Nacional fue el resultado de un proceso distinto marcado desde el principio por el antagonismo con el cuadro institucional. Era otra táctica y otra estrategia la que aplicaron tanto el gobierno de un lado como el M-19 y el EPL del otro. Estos plantearon las negociaciones con condiciones aparentemente más simples pero más exigentes. Se pactó un cese al fuego para la realización de un Diálogo Nacional entendido como consulta y deliberación de los más amplios sectores para buscar soluciones económicas, sociales y políticas a los principales problemas del país. En Corinto, la guerrilla reclamó para sí el reconocimiento de "movimiento popular alzado en armas" y en esos términos fue consagra-

do en los textos oficializados por el Presidente; todo desarrollo posterior quedó sujeto a lo que sucediera con el Diálogo y por lo mismo no existieron ni plazos ni metas expresas de desmovilización o "incorporación a la vida civil".

Ese Diálogo Nacional colocaba en el centro de la situación nacional un espacio para las expresiones no-institucionales; se movía en esa frontera difusa entre lo constitucional y lo inconstitucional, dentro de las instituciones pero en antagonismo con ellas; acogía el parlamento como instancia decisoria para las propuestas que surgieran, pero su propio funcionamiento era símbolo de la estrechez del Congreso y de la necesidad de mayor representatividad y de otra forma de legitimidad. Por eso el Diálogo no fue el acontecer en las seis o siete comisiones que se sentaron a deliberar en los mismos salones del Congreso de la República sobre proyectos de reforma; fue en realidad un proceso de pública confrontación entre el poder establecido y el limitado, pero real, poder político alcanzado hasta entonces por los alzados en armas. Fue a todos los niveles la exaltación de un contrapoder: campamentos guerrilleros a la vista de las grandes ciudades mostrando físicamente al "otro ejército"; campamentos de paz, de carácter civil pero de simbología político-militar en Cali, Medellín y Bogotá que promovían a la luz del día la formación de "milicias populares", manifestaciones de 50.000 personas en las que "comandantes" incitaban a dejar de ser oposición para construir una opción de gobierno y comenzar a ejercer poder donde fuera posible¹².

Con el Diálogo la guerrilla se propuso volcarse sobre las ciudades y propiciar la integración con lo que el procurador Jiménez Gómez había llamado "enguerrillamiento" popular. Mientras las FARC se situaron en el terreno de la institucionalización procurando que fuera lo más democrática posible para el ejercicio de la oposición, el M-19 y el EPL se metieron a las instituciones para afirmar la necesidad de otras auténticamente representativas y para promover independientemente de ellas aquellos elementos de poder popular que venían desarrollándose.

12 RESTREPO, Laura, con la colaboración de Camilo González, *Historia de una traición*, Editorial Plaza & Janés, Madrid, junio de 1986.

Si se
deran
mien
M-19
sada
sobre
de un

Lo in
ción
todo
tanto
de las
Diálog
to" y
les de
mieron
grado
tucion
expres
para u
bierno
cargarí
la ley
dores.

Para la
la irrup
insurgen
realinea
pide de
siciones
político
existenc
nas de
tregua e
opción
madas c
consona
neament
dieron l
que el n
La cont
campam

Si se mira desde la estrategia de las FARC y de quienes consideran prioritario en este período la formación de un movimiento de *oposición parlamentaria* y de masas, la política del M-19 y el EPL en el Diálogo Nacional aparece apresurada, pasada de revoluciones, basada en una visión cortoplacista que sobreestima la situación del país o sobreestima la capacidad de una vanguardia para modificar la coyuntura.

Lo intrincado de este proceso y la dificultad de una evaluación sobre el "apresuramiento", está en que en cierta medida todo el proceso de paz es resultado de los "apresuramientos" tanto del movimiento popular que se torna explosivo como de las nuevas formas de presencia de los alzados en armas. El Diálogo propuesto y pactado ya era parte del "apresuramiento" y su lógica no podía ser otra que llevar a superiores niveles de confrontación. Betancur y su equipo de gobierno asumieron el riesgo de aceptarlo solo porque el acuerdo ya logrado con las FARC les produjo la idea de que la iniciativa institucionalizadora había adquirido tal fuerza que asimilaría esas expresiones más radicales o las situaría en un terreno propicio para una derrota política y militar. Podría decirse que el gobierno firmó a sabiendas de que el forcejeo posterior se encargaría de completar los textos y de "meter en cintura" con la ley y con las armas a los más díscolos entre los negociadores.

Para la guerrilla en diálogo el cálculo era doble; o bien, con la irrupción popular en la lucha política y su fusión con los insurgentes en tregua, se abría un período revolucionario de realineamientos profundos con fraccionamientos en la cúspide del establecimiento, o bien por otro lado se ganaban posiciones para la continuidad a corto plazo de la estrategia político-militar. Cualquiera de las dos variantes asumía la existencia de una fuerza beligerante que afirmaba nuevas zonas de influencia y de retaguardia para la Fuerza Militar en tregua en áreas cercanas a los centros urbanos. Una y otra opción fue identificada por el Gobierno y por las Fuerzas Armadas que por su parte hacían sus propias simulaciones. En consonancia con ellas y para reducir los riesgos, casi simultáneamente con la firma de los acuerdos de agosto de 1984, dieron los pasos para forzar su redefinición y encontraron que el nudo que se había formado no era sencillo de desatar. La contraofensiva militar de diciembre de 1984 contra el campamento del Estado Mayor del M-19 en Yarumales sub-

estimó el desarrollo técnico de la guerrilla y se enredó en los laberintos políticos de los pactos. Ese revés del Gobierno obligó a reafirmar el *Diálogo con tregua formal* pero elevó aún más la temperatura del proceso. Los militares mantuvieron la línea de no permitir campamentos armados en zonas consideradas estratégicas y lo demostraron con hostigamientos y operaciones en gran escala desde principios de 1985. El espacio del Diálogo se fue cerrando con la temprana ruptura de hecho de la tregua hasta que el atentado a los voceros públicos de la guerrilla y la prohibición de los "campamentos de paz" indicaron que lo único que faltaba para poner punto final era el anuncio protocolario de la terminación¹³.

Quién, cuándo y cómo se haría el anuncio era la pregunta de muchos en junio de 1985; y el Comando Superior del M-19 se apresuró a decir "aquí está el muerto", facilitando que el Gobierno le saliera adelante en la batalla ideológica por la "opinión pública".

Lo último en fenecer fueron las comisiones del Diálogo que funcionaron a medias en Bogotá. Ellas fueron siempre el resplandor, o mejor la sombra que proyectaba el Proceso de Diálogo. El último acto de esas comisiones fue una Plenaria en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional donde cada quien informó de sus trabajos y sobre las propuestas elaboradas en materia agraria, urbana, en servicios públicos o en asuntos constitucionales. La carta entregada ese día por la mayoría de los dialogantes, demandando al Presidente de la República real interés por el Diálogo y la destitución del Ministro de Defensa acusado de torturador por la Corte Suprema de Justicia, fue la piedra del último escándalo. . . que ya no fue escándalo porque el presidente Betancur se limitó a decirle a sus delegados "apaguen la luz y cierren ese negocio".

La Unión Patriótica y la C.N.G.

En las filas de las organizaciones armadas se delimitaron dos proyectos. Las FARC por un lado con la Unión Patriótica y por otro la Coordinadora Nacional Guerrillera.

13 BEHAR, Olga. *Las guerras de la paz*. Planeta Editores, Bogotá, 1985

Las FA
triótica
paso a
hecho
mo gar
miento
tratégic
volver
Las elec
son el
de posi
capaz d

Este pro
de tensi
del pres
las FAR
interloc
legal; a
se ciña a
se inicié
1987, la
rán expr
ción se c
tica con
ral con a

Al lado
triótica y
sometido
lidad con
fuerza o
fine *Ejér*
como FA
FARC es
UP. En la
intelectua
la UP por
común en
a una fuer

Si las ante
influencia
lado el des

Las FARC mantienen la política de fortalecer la Unión Patriótica y buscan negociar que el desmonte pactado marche paso a paso con la apertura y con las pruebas electorales. *De hecho es una situación en la que la guerrilla se mantiene como garante y apoyo de la iniciativa electoral del nuevo movimiento político.* Las FARC parecen redefinir los objetivos estratégicos de formación de un Ejército del Pueblo e intentan volver a la "autodefensa" de principios de los años setenta. Las elecciones municipales programadas para marzo de 1988 son el punto de referencia en la consolidación o ampliación de posiciones de influencia y de constitución de una fuerza capaz de presionar la "apertura democrática".

Este proyecto de la Unión Patriótica se desenvuelve en medio de tensiones crecientes, pues la política de "normalización" del presidente Barco considera agotadas las negociaciones con las FARC y si bien mantiene los acuerdos, ahora toma como interlocutor a la Unión Patriótica en tanto formación política legal; a las FARC les aplica entre tanto el torniquete para que se ciña a los textos y se desmovilice a fecha fija. Una vez que se inicie la campaña electoral, posiblemente a mediados de 1987, las contradicciones FARC-FF.AA. - Gobierno, adquirirán expresiones cada vez más agudas, pues la institucionalización se quebraría completamente si detrás de la Unión Patriótica continúa lo que algunos han llamado la "política electoral con armas".

Al lado de esas contradicciones el proyecto de la Unión Patriótica y el compromiso de desmonte de las FARC, se ve sometido a tensiones internas. La Unión Patriótica es una realidad compleja, puesto que su fuerza electoral depende de la fuerza o influencia de las FARC en tanto guerrilla que se define *Ejército del Pueblo*; todavía suscriben sus comunicados como FARC-EP. En sectores rurales, donde el peso de las FARC es considerable, son a la vez los soportes mayores de la UP. En las ciudades se presenta el fenómeno de sectores de la intelectualidad y de las capas medias que se han acercado a la UP por su prometido tránsito de la guerra a la Paz, pero es común entre sus seguidores la adhesión por el reconocimiento a una fuerza respaldada militarmente.

Si las anteriores consideraciones son válidas, el traspaso de la influencia desde las FARC a la UP no es asunto fácil. Por otro lado el desmonte de los frentes armados (definidos como esla-

bones para el Ejército del Pueblo), para pasar a núcleos de autodefensa, probablemente choca con resistencia de los mismos guerrilleros para quienes no son suficientemente tangibles las conquistas de la tregua y para quienes, interpretando lo que quisieran estuviera en los pactos, no ha existido un cumplimiento por parte del Gobierno y del Congreso en cuanto a reformas socioeconómicas y políticas. La permanencia del Estado de sitio, la militarización y la impunidad de los paramilitares que han asesinado a más de 200 militantes de la UP en 30 meses, le plantea a los militantes muchas preguntas sin respuesta satisfactoria.

Los pronósticos más atendidos indican que pese a esos conflictos internos y externos, continuará el tránsito de las FARC a la vida civil y la UP trataría de afianzar, en la elección popular de alcaldes, las posiciones alcanzadas en 1986.

Por otro lado, la ruptura del diálogo nacional creó las condiciones para la unión del M-19 y el EPL con los grupos que no habían firmado la tregua (ELN, Quintín Lame, PRT y Patria Libre)¹⁴. Entre abril y junio de 1985 se formó la Coordinadora Nacional Guerrillera, C.N.G., que según cálculos agruparía cerca del 50% de los alzados en armas. La CNG se ha presentado inicialmente como un acuerdo político y militar alrededor de una plataforma mínima y de la propuesta de Asamblea Nacional Popular. Para ellos "la paz oligárquica fracasó porque no era nacional, ni estaba llena de pueblo"; su llamado a la lucha armada se plantea como lucha contra el militarismo del régimen, "por la construcción de una sociedad más justa, más nuestra, más democrática"¹⁵.

En la coordinadora confluyen organizaciones con diferentes trayectorias y concepciones sobre los objetivos generales o sobre la táctica y la estrategia político-militar. Las más antiguas son el M-19, el ELN y el EPL que han tenido orígenes y experiencias diferentes, como lo mostró por ejemplo la actitud ante la Tregua y el Diálogo Nacional, del cual no fue par-

14 En el artículo "Los que no firmaron" publicado en la Revista *¿Qué pasó?*, de noviembre de 1985, se presenta una descripción de organizaciones armadas que actualmente forman parte de la CNG, especialmente del ELN y el Quintín Lame.

15 *Coyuntura*, revista de análisis político, No. 5, enero de 1986.

ticip
cuan
ganiz
tan
que a
cia la
pació
social

En la
la CN
dinac
ticas
de 19
mient
los qu
acuero
M-19
de la
la luci
námico
Améri
otros
camen

Los er
gunas
mo los

— La
lado
to o
litar
ña in
ción
polí

— La i
de "
form

16 Cole

tícipe el ELN. Esas diferencias se presentan también en cuanto a áreas de influencia y en concepciones militares u organizativas. En el editorial de la revista *Colombia Viva*¹⁶, anotan esas dificultades del "camino de unidad" enfatizando en que a pesar de ellas "se identifican en volcar sus energías hacia la construcción de una alternativa de poder con la participación de las fuerzas revolucionarias, populares, gremiales, sociales y democráticas del país que comparten este objetivo".

En la fase actual que parte del Paro Cívico Nacional de 1985, la CNG ha aparecido principalmente como instancia de coordinación militar y solo muy débilmente con propuestas políticas para el país. En ese terreno, entre junio de 1985 y enero de 1987, se ha registrado una intensificación de los enfrentamientos y acciones armadas, a niveles solo comparables con los que se dieron en los meses anteriores a la firma de los acuerdos del diálogo o cuando los enfrentamientos con el M-19 en Yarumales y en el Valle del Cauca en plena vigencia de la Tregua. Toda esa actividad indica una modernización de la lucha guerrillera que hace más notorio el desfase con la dinámica política. Las experiencias del M-19 y del Batallón América están sirviendo de escuela o laboratorio para los otros grupos y también el Ejército oficial se actualiza técnicamente a grandes velocidades.

Los entendidos en estas materias señalan en líneas gruesas algunas novedades de la actividad de la CNG, con aspectos como los siguientes:

- La actuación por Campañas político militares, dejando de lado la antigua práctica de guerrilla errante, de hostigamiento o de acciones esporádicas, para someterse a un plan militar calculado en el tiempo y territorialmente. La Campaña integra un conjunto de acciones que articulan a nivel nacional a todos los componentes en una iniciativa con metas políticas, ideológicas y militares previamente establecidas.
- La incorporación de técnicas de choque con el ejército y de "batallas guerrilleras", sustituyen la "emboscada" como forma exclusiva de enfrentamiento. "La batalla guerrillera"

¹⁶ *Colombia Viva*, revista de la CNG, abril de 1986.

supone utilización de armas modernas combinadas con instrumentos rudimentarios (fusiles de asalto y palas, bazucas y bombas caseras), lo mismo que la incorporación de tácticas de guerra de guerrillas y defensa de posiciones. Se intenta el paso a la guerra de movimientos.

- La concentración de fuerzas y la integración de Frentes en Batallones dentro de la idea de proyectar un Ejército.
- La definición de zonas de influencia y retaguardias internas en áreas pobladas y cercanas a las grandes ciudades.
- La combinación de unidades regulares, con guerrilla, fuerzas especiales y formaciones milicianas o de autodefensa¹⁷

Todas esas elaboraciones y prácticas que se intercambian en la CNG, van integrando su proyecto de mediano plazo de formación de una Dirección Revolucionaria Unificada, un Ejército Popular y un movimiento de masas insurgentes con capacidad de imponer un nuevo Bloque de Poder.

Después de 18 meses de existencia, los dilemas de la CNG son, entre otros, el distanciamiento entre su acción militar y la lucha política e ideológica, el desfase entre el fortalecimiento militar y la dinámica del movimiento de masas; la dificultad de tomar iniciativas a nombre propio en el movimiento de masas, ante la agudización de la "guerra sucia" y de la represión oficial; en fin, la debilidad en el tratamiento político a la contraofensiva del régimen y de las Fuerzas Armadas que aplican un concepto de guerra total combinando múltiples elementos y procurando en esta fase mantener formas de la democracia representativa, la búsqueda de consensos, de institucionalización y de legitimación.

Es factible suponer que las fuerzas guerrilleras pueden fortalecerse dentro de ciertos límites no obstante la pérdida de iniciativa política, pero si esa situación se prolonga y no se presentan como alternativa creíble de poder o de gobierno, como opción tangible para la solución de los grandes y graves problemas actuales del pueblo colombiano, la acción militar comenzará a volverse como bumerang y a contribuir al aisla-

17 Antonio Navarro presenta una visión sobre este tema en la revista *Estudios políticos de México*, de julio de 1986.

miento y a la erosión político-militar. Aparte de la relación con la población que se ve debilitada en esta eventualidad, también tiene más cabida la actividad contrainsurgente que se finca en buena medida, en la reducción de la guerrilla al plano exclusivamente técnico en donde aspira desvestirle de su pretensión de movimiento político nacional para presentarle como equivalente a una actividad terrorista.

La ruptura del Diálogo Nacional significó, entre otros, la ruptura de la dinámica convergente que traía la insurgencia y la protesta social. Al comenzar 1987 el panorama se presenta fraccionado: por un lado las FARC y organizaciones afines, mantienen la línea de fortalecimiento de la UP y el acuerdo de incorporarse a la vida civil; la CNG anuncia nuevas campañas; el movimiento social de masas y el movimiento democrático se desenvuelven en un plano de resistencia y de integración orgánica y una franja considerable que se ilusionó durante el Diálogo con la posibilidad de un nuevo movimiento político de masas, alternativo al bipartidismo, se mantiene a la expectativa o en sectores de la intelectualidad, prefiere acomodarse en las filas liberales. La iniciativa política de la élite liberal y conservadora, dentro de su proceso de institucionalización, se plantea un evento de innegable impacto nacional para los próximos años, cuál es la Elección Popular de Alcaldes.

El movimiento de masas que encabezaron el M-19 y el EPL en los márgenes abiertos por el Diálogo Nacional, fue de grandes proporciones pero no alcanzó a cristalizar en organización capaz de establecer nexos permanentes entre la guerrilla y los sectores de la población urbana que manifestaban simpatía o adhesión. La proyección de una organización de masas relativamente autónoma de la guerrilla y con posibilidades de una dinámica propia independiente de la tregua, fue desechada tanto por el M-19 como por el EPL que optaron por el contrario por afirmarse directamente como polos de militancia. Las milicias populares parecían destinadas a ser ese nexo pero no tuvieron tiempo para expandirse y fueron identificadas como prolongación de la guerrilla y atacadas a muerte por las Fuerzas Armadas gubernamentales.

Con la ruptura del diálogo se rompieron muchos lazos que los guerrilleros en tregua habían establecido en las ciudades. La dinámica de guerra llevó a que los grupos o personas que se

les habían acercado en busca de una *opción de masas de tipo legal*, tomaron distancia y hasta subrayaron diferencias para no ser identificados por las Fuerzas Armadas como miembros o simpatizantes de la guerrilla. Las organizaciones armadas se ligaron como nunca antes a capas de la población de los barrios populares en los grandes centros urbanos, pero al romperse la tregua y al lanzarse la ofensiva de aniquilamiento de las milicias, no estaban dotadas de instrumentos organizativos de autodefensa o de resistencia democrática.

¿Era posible mantener esa convocatoria que se vio durante el Diálogo desde un cuadro organizativo distinto al de las organizaciones armadas? Si no era ese el caso y existía una atracción en tanto política con armas, no era en cambio posible una forma tramitatoria que durante un período se moviera en la frontera entre lo legal y lo ilegal o entre la organización política civil y la organización político-militar? o en otros términos, ¿era posible que se mantuvieran los organismos del Diálogo, comisiones nacionales, regionales y locales, con participación de grupos y personalidades democráticas, voceros de organizaciones de masas, etc., no obstante la ruptura de la tregua y el retiro de la guerrilla y del Gobierno?

El enunciado de esos interrogantes apunta a mostrar la complejidad del tema y las posibilidades que estaban en juego. Si no fueron suficientemente exploradas se debe a problemas de dirección de la guerrilla y a las debilidades de las organizaciones democráticas o de izquierda que desde la legalidad confluyeron al Diálogo.

En los
sarista
brado
con la
domin
conmo
servado
zar al
pases d
nuevos
esta dé
conside
en la ca

La crisi
América
dictator
debería
"Conces
bilitar o
el sistem
fue por
escenari
tal impo
pular en

La idea
fundame
del sistem
ca. La es
do, en c

III

INSTITUCIONALIZACION Y COOPTACION DEL MOVIMIENTO POPULAR

En los años ochenta y en especial con el Proceso de Paz Belisarista y con la "normalización" del presidente Barco, ha cobrado vigencia la divisa "institucionalización o catástrofe", con la que el ex presidente López Michelsen alertó a las clases dominantes del país. Desde que ANAPO y los paros cívicos conmovieron al establecimiento, los dirigentes liberales y conservadores más previsivos indicaron la necesidad de modernizar al Estado, de adecuar las instituciones para que fueran capaces de resistir las acechanzas revolucionarias de los tiempos nuevos. La insurgencia y la explosión social de principios de esta década vinieron a corroborarles la pertinencia de tales consideraciones y la imposibilidad de mantener los conflictos en la camisa de fuerza de las viejas instituciones.

La crisis del gobierno de Turbay señaló en Colombia como en América Latina la crisis de los manejos dictatoriales o semi-dictatoriales e indicó que el cambio de la institucionalización debería reemprenderse con nuevos elementos, con algunas "Concesiones" para tratar de encauzar la protesta social y debilitar o deslegitimar completamente la acción armada contra el sistema. La "apertura democrática" enunciada por Betancur fue por ello componente fundamental del proceso de paz y escenario de luchas entre fuerzas encontradas de trascendental importancia para el actual desarrollo del movimiento popular en Colombia.

La idea de modernizar las instituciones del Estado tiene por fundamento la corroboración de la existencia de una crisis del sistema político o de una tendencia a que ella se produzca. La estructura institucional construida en un momento dado, en consonancia con determinadas relaciones de clase y

con requerimientos específicos del proceso de acumulación, tiene una persistencia que trasciende las circunstancias que le dieron origen. De modo que resulta inevitable que las modificaciones en la situación social, en la evolución de la economía nacional o en sus articulaciones con la economía mundial, conduzcan a la infuncionalidad del cuadro institucional del régimen político. Esa falta de correspondencia conduce a dos lógicas: por un lado los sectores subalternos o dominados de la sociedad desbordan los mecanismos de control, indicando con sus múltiples formas de resistencia (reivindicativas, insurgentes, e incluso delictivas), el anacronismo de las instituciones imperantes. Desde este ángulo se puede reconocer la necesidad de conquistar nuevos derechos y libertades, los que en realidad no pueden ser más que eslabones de una cadena que en el límite desajusta no solo al régimen vigente sino al aparato estatal. Pero desde otro punto de vista se identifica la necesidad de modernizar desde arriba las instituciones para evitar el cuestionamiento del Estado y para atender los problemas de la economía.

Se trata de dos lógicas contrapuestas que se concretan en fuerzas políticas y materiales que impregnan los cambios institucionales. En este dominio no cabe la posibilidad de equilibrios armónicos. En el mejor de los casos cuando no se imponen las fuerzas de la democracia, la modernización vertical tiende a asimilar, a integrar de manera distorsionada ciertas aspiraciones de los sectores subordinados con el propósito de eliminar factores de perturbación de la estructura que se preserva.

Muchas reformas o intentos de reforma, desde la de 1968 hasta la fallida de 1979 y la Ley 2a. de 1984, o hasta la más recientes de la llamada "apertura", han sido sustentadas por la urgencia de poner los instrumentos del Estado a tono con los nuevos problemas. Juristas, políticos, académicos y estadistas han abundado en argumentos para demostrar ese desajuste entre las realidades actuales y el ordenamiento jurídico-político del régimen. Los lugares comunes son la constatación de la característica predominantemente urbana que ha adquirido el país, con todas las implicaciones que lleva en la conformación social, en los asuntos laborales, en las desigualdades regionales o en las exigencias del Estado; también se ha señalado el relativo desarrollo industrial y la conformación de

los gr
naliza

Pero
han si
gencia
urbana
la guer

Los co
en est
dos po
En su
la "co
y prev
la edac
tar a u
al reda
XX —d
que co
cipalme
da sub
Repúbl
guerrill
yo de
un golp
llevan l
el terro
que se
nada fo
opinión

La mod
trolada'
ria y al
litar. Es
turas bá
tancur e
tituciona

los grupos monopólicos industrial-financieros o la internacionalización de la economía.

Pero los síntomas más relevantes del desajuste institucional han sido ubicados en el dominio del conflicto político: vigencia casi permanente del Estado de sitio, insubordinación urbana, irresolución de la cuestión agraria, persistencia de la guerrilla, movimientos cívicos, etc., etc.

Los conceptos de institucionalización y modernización que en estos años han tenido tanta aplicación, fueron enriquecidos por López Michelsen cuando su gobierno (1974-1978). En su Testimonio Final volvió sobre el tema para subrayar la "conveniencia de actualizar nuestras viejas instituciones y prevenir una revolución". Para este estadista no vivimos ya la edad heroica de las grandes hazañas castrenses para derrotar a un gobierno, tal como ocurrió a finales del siglo pasado al redactar la Constitución del 86. "Las revoluciones del siglo XX —dice— nos han enseñado la técnica del golpe de Estado; que comienza por apoderarse de los servicios públicos, principalmente la comunicación y el transporte. El centro de toda sublección contra el Gobierno es la propia capital de la República o las capitales regionales, en convivencia con una guerrilla que distrae fuerzas en regiones apartadas con el apoyo de una red urbana. . . La guerrilla de nuestro tiempo da un golpe de mano y desaparece, mientras sus patrocinadores llevan la guerra a las ciudades, por medio de huelgas ilegales, el terrorismo, los secuestros, los paros desordenados con los que se pretende coaccionar al gobierno a actuar en determinada forma, desconceptuando su autoridad a los ojos de la opinión"¹⁸.

La modernización que se propone es la de una "apertura controlada" que elimine los riesgos de perturbación revolucionaria y al mismo tiempo aleje la posibilidad de la dictadura militar. Es la institucionalización sin modificación de las estructuras básicas y para preservarlas. Como expresó Belisario Betancur en su Informe al Congreso de 1984 "la reforma constitucional de 1968 es la propiciatoria de lo que se ha llamado

18 LOPEZ MICHELSEN, Alfonso, *Testimonio final*, editado por el Ministerio de Gobierno en julio de 1974.

Apertura Democrática”, encaminada a reformar las instituciones de modo que “la oposición al gobierno no implique oposición al Estado”.

Si se toma en cuenta esta línea de acción de los sectores más lúcidos de la burguesía colombiana se entienden mejor porque en el proceso de paz chocaban desde el principio dos discursos poco compatibles; el de los movimientos sociales y políticos extrainstitucionales que procuraban abrirse campo incluso en las instituciones y el discurso del poder establecido que quería, meter los “nuevos poderes” ilegales, en las instituciones vigentes sometidas a pequeños ajustes. *Esta contradicción sigue siendo columna vertebral del desarrollo político colombiano una vez que el “proceso de paz” llega a sus últimos actos.*

El punto de referencia de las reformas políticas impulsadas durante el gobierno de Betancur tenía que ser esa relación entre el movimiento social y la subversión. El entonces Ministro de Gobierno, al servir de vocero de los proyectos gubernamentales anotó repetidamente que “cada vez son más numerosos los paros cívicos y las protestas que degeneran en tumultos con saldos muchas veces de saqueos y muertes violentas”; “Vale la pena también considerar la dolorosa correspondencia que ha venido presentándose entre la desatención a las comunidades y los procesos subversivos que tanta pena le han causado a la nación en el curso de los últimos años”¹⁹.

La estrategia de Betancur en este terreno fue ofrecer condiciones para mayor participación parlamentaria e injerencia popular a escala municipal, a cambio de desmovilizar la guerrilla e integrar al Estado la protesta que se desbordaba por fuera de control.

La lógica de la “apertura” se sitúa en el comportamiento corriente de los regímenes capitalistas cuando los métodos coercitivos entran en crisis; entonces, como recurso límite combina la “concesión” y hasta la “coparticipación en la ges-

19 CASTRO, Jaime, *Reforma política y descentralización*, editado por el Ministerio de Gobierno, 1986.

ción", que pueden llegar desde pequeñas cuotas hasta la misma vinculación al gabinete ministerial. En Colombia el "gobierno nacional" de Belisario Betancur no llegó a tanto y la institucionalización se mostró bien restringida. Volvió a mostrarse que las concesiones menores que se ve obligado a hacer un régimen en un momento dado, una vez convertidas en hecho irreversible se convierten o tratan de convertirse, en instrumentos que el mismo régimen busca ampliar para restarle impulso a la lucha y transformar las conquistas en elementos de conciliación y estabilización. La institucionalización de las posiciones ganadas por la acción directa de masas, es parte del juego permanente del Estado para procurar estabilidad o "normalización". Las conquistas son presentadas como concesiones; las concesiones mínimas son exageradas; los logros de la movilización son utilizados para desmovilizar; lo que es fruto del poder de las masas populares se procura desvestir y transformar en elemento rutinario de la vida social.

Parte de ese proyecto integrador encaminado a cooptar expresiones extrainstitucionales, han sido las disposiciones sobre la democracia local que fueron aprobadas durante la administración Betancur y reglamentadas por el gobierno liberal. La transformación más significativa de la "apertura" ha sido la aprobación de la Elección Popular de Alcaldes que comenzará a regir a partir del segundo domingo de marzo de 1988. Además se introdujeron organismos asesores o de consulta de la administración municipal, como las denominadas Juntas Administradoras Locales, en las cuales una parte de los miembros deberá ser de elección directa de los habitantes de la respectiva comuna o grupo barrial o veredal de más de 10.000 habitantes. La participación de delegados de los usuarios en las Juntas Directivas de las Empresas de Servicios Públicos a nivel municipal, es otra disposición que configura la "apertura local".

En lo nacional las reformas políticas se dirigieron a modernizar la justicia, institucionalizando muchas disposiciones que, de ser excepcionales de la justicia castrense en tiempos de Estado de sitio, pasaron a ser "normales" para todos los tiempos. Los partidos políticos comenzaron a ser reglamentados mediante un estatuto de factura bipartidista y el sistema electoral se reordenó creando una Corte de mayoría liberal y conservadora y con cuota para la oposición parlamentaria.

El II Congreso de Movimientos Cívicos, realizado en julio de 1986 resumió el sentido de las reformas en un párrafo concluyente sobre el gobierno de Betancur: "Prometió, dice la declaración central, apertura política y cambio con equidad, pero a la postre demostró cuán grande es la inflexibilidad de este régimen a las demandas democráticas, económicas y sociales de las grandes mayorías. El balance no puede ser más precario. *Solo recortadas dosis de democracia local en un mar de modernización antidemocrática del sistema político general*"²⁰.

Las limitaciones de las reformas políticas han sido señaladas desde distintas vertientes que coinciden en señalar que, no obstante el fortalecimiento fiscal de los municipios, continúa siendo reducida su capacidad decisoria sobre los problemas críticos de los servicios públicos o su real papel dentro de la estructura institucional del poder. Poco significan esas cuotas de democracia local en medio del centralismo que es propio del sistema político colombiano que se sigue reforzando a pesar de la descentralización e incluso merced a ella. La tendencia principal de la evolución reciente del régimen político, a pesar de la presión del movimiento democrático y popular continúa siendo la del reforzamiento del poder del ejecutivo, el autoritarismo presidencial, el fortalecimiento y modernización de las Fuerzas Armadas que consolidan su preeminencia en el conjunto del sistema, al lado del bipartidismo.

La "concesión municipal" al no reflejarse con suficiente fuerza en las instancias claves del poder, adquiere ese sentido ambivalente con que suele presentarse el proyecto institucionalizador de la élite bipartidista. Es un paliativo a la presión de base que se busca utilizar para "municipalizar" por cauces legales la protesta cívica. Se intenta crear condiciones para que los movimientos y paros cívicos tengan un filtro o amortiguador local y no se estrellen siempre contra el Gobierno Nacional, para que las comunidades sean autogestoras de la prestación de servicios y no pidan más de lo que tributan, para que la inconformidad se dirija contra el Alcalde y para que si

20 Declaración del II Congreso de Movimientos Cívicos y Organizaciones Populares, Revista *Debate* No. 4, septiembre de 1986.

eventualmente el elegido se presenta como vocero de esas demandas ante el poder ejecutivo pueda ser destituido por "faltas disciplinarias graves o por instigador de actos ilegales".

La participación en las Juntas Administradoras Locales también es indicativa de ese juego de "Concesión-cooptación". Solo podrán participar en ellas las organizaciones legalmente autorizadas, lo que la primacía da a las Juntas Comunales controladas por el Estado y por el clientelismo. Por demás la ley solo les otorga funciones de consulta, asesoría, o de consejeras de la administración municipal. De manera que a nombre de la participación ciudadana y comunitaria en realidad se tiende a formar un ente burocrático que alegue la legitimidad como vocero de la comunidad interponiéndose ante las formas no-institucionales, coyunturales, de la lucha cívica y popular y que anteponga la presentación de memoriales y constancias en las reuniones de consulta a las engorrosas vías de hecho o de movilización.

La motivación inicial de estabilización política, no reduce la reforma municipal a un elemento de orden o control social; el conjunto de disposiciones que vienen introduciéndose, también forman parte de la readecuación del Estado Capitalista demandada por los procesos de acumulación de la última década y que es sustentada por corrientes partidarias de modificar las funciones económicas del Estado, las formas de prestación de servicios públicos y el ordenamiento regional. En estas anotaciones subrayamos los aspectos que inciden más directamente en los movimientos populares sin desconocer ese aspecto de "modernización" que subyace en las reformas. El énfasis en la tendencia central integradora no desconoce el hecho no menos importante relativo a las contradicciones que se producen como resultado de la incidencia de la presión democrática y popular dentro de la misma legalidad y en las nuevas instituciones.

La ofensiva "institucionalizadora y de cooptación", a pesar de no conllevar cambios en las tendencias y formas fundamentales del sistema político, si tiene un fuerte impacto ideológico y en un terreno institucional tolerable, deja espacio para algunas contradicciones. Es un hecho innegable que la "democracia local", con todas sus restricciones, genera ilusiones que gravitarán inevitablemente en amplios sectores populares

y en las clases medias. Durante los próximos años muchos querrán hacer la experiencia de la elección de alcaldes o de la asesoría en Juntas y toda suerte de organismos de participación controlada. El dilema actual para el movimiento popular, para los comités cívicos y para todos los organismos que han resultado del auge de este período, pasa también por estas realidades.

¿Cómo preservar la independencia del Estado, la perspectiva de formación de poder popular, sin aislarse de aquellos sectores que consideran las elecciones municipales como un sustancial avance democrático? ¿Cómo preservar la autonomía y al mismo tiempo actuar dentro de instituciones del sistema? ¿Cómo reivindicar la democracia actuando dentro de instituciones eminentemente antidemocráticas?

IV

PROCESOS DE UNIDAD Y POSIBILIDADES ACTUALES DEL MOVIMIENTO POPULAR

Después del Paro Cívico Nacional de 1985 y del Palacio de Justicia, el movimiento popular entró en una coyuntura distinta en la cual se pueden distinguir algunos rasgos:

- La movilización social y política de carácter nacional asumió un cauce principalmente orgánico con tendencia a la centralización o coordinación a nivel nacional y regional a partir de los núcleos más dinámicos del ascenso de masas de todo el período.

Se dieron pasos decisivos para la constitución o consolidación de nuevas organizaciones sociales produciéndose un salto cualitativo en la reorientación del movimiento popular y en la ruptura de viejos lazos de control estatal y bipartidista.

- A la par con la centralización nacional se formalizan plataformas o programas de contenido democrático, de afirmación de la lucha por la independencia nacional y por la liberación económica y social. Se asume la solidaridad con otros pueblos lo mismo que un criterio de independencia frente a la política de bloques o a aparatos internacionales que sirven a ella o a propósitos de dominación.
- Se enuncian orientaciones o programas que denotan el interés por superar las posiciones exclusivamente contestatarias, que se limita a la resistencia en el plano reivindicativo, económico o de reformas parciales. Las coordinaciones o direcciones que se conforman coinciden al menos en el papel en la necesidad de buscar una alternativa de poder, de plantear una economía alternativa, de proponer planes de

desarrollo económico y social que muestren soluciones globales desde los intereses de las mayorías populares; se avanza en reivindicar la necesidad de instituciones alternativas a las actualmente existentes que sirvan de mecanismos efectivos de participación democrática y garantía para los cambios que necesita el país.

- Desde las organizaciones sociales se comienza a plantear la necesidad de una organización política nacional que se corresponda con los nuevos desarrollos del movimiento popular y con la fase que se abre una vez que la negociación política llegó al "techo" máximo. Paralelamente las agrupaciones políticas democráticas o de izquierda que no se reconocen en los partidos tradicionales, registran múltiples eventos, acciones comunes y planteamientos que indican un proceso real de confluencias hacia la formación de alternativas democráticas.

Durante esta última fase (junio 85-enero 87), los procesos nacionales de mayor trascendencia en el campo obrero y popular han sido el Movimiento por la Vida, la unificación nacional de los movimientos cívicos y populares, la fundación de la Central Unitaria de Trabajadores y el avance en la centralización política por fuera del bipartidismo en la búsqueda de una alternativa democrática y popular.

Movimiento por la Vida

El Movimiento por la Vida se ha constituido de hecho en la acción nacional democrática de mayor incidencia en la lucha política en esta última fase. El punto de partida para el reanimamiento de esta movilización democrática fue la reacción nacional contra la política de tierra arrasada que se exhibió cuando la masacre del Palacio de Justicia en noviembre de 1985; la elemental reivindicación de respeto a la vida se convirtió en divisa de los más heterogéneos sectores sociales afectados por la militarización de la vida nacional, por la violación de los Derechos Humanos y el avance de la "guerra sucia" implementada por más de 40 grupos paramilitares. El ambiente de violencia marcado por todos esos hechos, suscitó un reclamo sin antecedentes por la vida, máxime cuando a la aplicación sumaria de la pena de muerte por parte de elementos de las fuerzas armadas, se le agregaron hechos como

la muerte de 25.000 personas como consecuencia de la imprevisión ante la eclosión del volcán del Ruiz o como la matanza de más de un centenar de militantes del grupo autodenominado "Frente Ricardo Franco de las FARC" realizada por la misma dirección de esa organización que los condenó por supuestos infiltrados del B-2. También ha estado presente la condena de actividades de destacamentos de las FARC que fusilan disidentes u opositores o al comando del ELN que dio muerte al dirigente cívico y exguerrillero Ricardo Lara Parada.

Desde finales de 1985 hasta iniciado 1987, el Movimiento por la Vida en lo fundamental se ha presentado como reacción defensiva ante el giro hacia la derecha que asumió la administración Betancur en sus últimos meses y que el gobierno de Virgilio Barco acentúa casi sin solución de continuidad. En un contexto político nacional presidido por el Estado de sitio, la militarización fue cobrando primacía en relación a los enunciados de "apertura" o de "diálogo". La crisis de la política de paz de la administración Betancur se mostró tanto en la declaratoria de guerra a muerte a la Coordinadora Nacional Guerrillera y a aquello que se le considerara vinculado, como en la autonomía que fueron cobrando grupos dentro de las Fuerzas Armadas, o grupos armados por terratenientes o capitalistas que se consideraban amenazados y fueron asumiendo por cuenta propia la aplicación de condenas a pena de muerte.

Organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos han dado cuenta de las proporciones que ha ido presentando la represión. La crisis institucional ha llegado al punto de que es difícil hablar de Estado de Derecho en Colombia y, menos aún de respeto al Derecho de Gentes. El Procurador del cuatrienio 1982-1986, llegó a afirmar que en el país se practican en realidad dos constituciones, una la que está consagrada desde 1886 y es reconocida como la base de todas las instituciones y otra, la que en realidad opera y que es definida a discreción por los administradores del Estado de sitio o por los encargados de guardar el orden público.

En ese contexto de quiebra del Estado de Derecho se registra la escalada de violación de los Derechos Humanos. La cifra de desaparecidos se elevó desde 145 al término del gobierno de Turbay Ayala a 984 en diciembre de 1986. Durante 1986, ca-

da día fue retenido y desaparecido un dirigente popular, sindical o militante de izquierda. Los asesinatos políticos llegaron a la escandalosa cifra de 3.500 en 4 años, que confirma la existencia de una directriz superior para que se evite la captura con vida de guerrilleros, de simpatizantes o de sospechosos de colaborar con la guerrilla; el fusilamiento en el acto es practicado con dirigentes cívicos, campesinos e indígenas y se ha vuelto corriente lo que la Procuraduría de la Nación llamó "eutanasia social" consistente en matar mendigos o raponeros por decenas, para "limpiar" las ciudades de delinquentes²¹. El asesinato de militantes de la guerrilla en tregua se volvió práctica común y la Unión Patriótica se mantiene como blanco privilegiado de los paramilitares. Por otra parte, la ofensiva militar contra las organizaciones armadas se ha venido desarrollando con consideración con la población civil, llegándose a situaciones críticas como las que se han denunciado en Cali, Urabá, poblaciones del Cauca o de los Llanos, donde decenas de ciudadanos no involucrados en los enfrentamientos armados han sido víctimas inocentes de la represión.

El Movimiento por la Vida se ha desarrollado entonces, en primer lugar, como resistencia a la violencia ejercida desde el Estado y las Fuerzas Armadas; ha sido un reclamo democrático frente a la arbitrariedad o la tolerancia ante la transgresión de la propia normatividad vigente. Desde esa actitud defensiva han buscado encadenar otros aspectos que reivindican los derechos democráticos en un país de Estado de sitio, o el derecho a mejores condiciones de vida, a una vida digna y a cambios de tipo económico y social.

Las formas de acción del Movimiento por la Vida se apoyan en la experiencia de los Foros por los Derechos Humanos efectuados cuando la administración Turbay aplicó su Estatuto de Seguridad. Sin embargo, durante los últimos años, lo característico fue el desplazamiento a la movilización popular. En casi todos los departamentos del país se realizaron Foros, Encuentros y protestas en las calles. El Foro Nacional por el Derecho a la Vida efectuado en Bogotá en diciembre de 1985, semanas después de los sucesos del Palacio de Justicia,

21 Informes del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos.

servió de escenario para el relanzamiento de este movimiento y se multiplicaron en todo Colombia los organismos de coordinación para el desarrollo de actividades por la vida y los Derechos Humanos. El Colectivo 5 de junio, que se encargó de coordinar las movilizaciones nacionales de mayor alcance durante 1986, indicó las variaciones operadas con respecto a la administración Turbay. El movimiento se presentó con mayor base popular de respaldo y con métodos más proclives a la movilización de masas. Al mismo tiempo se observó que sectores de los partidos tradicionales, o de la llamada intelectualidad democrática que habían tenido protagonismo destacado en la defensa de los Derechos Humanos cuando la administración Turbay, ahora o se marginaron o asumieron posturas neutrales. El compromiso con el gobierno de Betancur se paró a algunos de la movilización por la vida y el temor ante las dimensiones de la polarización y el carácter directamente antimilitarista del movimiento paralizó a muchos entre la academia y la intelectualidad. Algunos sectores de izquierda que subordinaban esta lucha a la participación de personalidades de los partidos tradicionales o a compromisos con el Gobierno, perdieron iniciativa.

En encadenamiento del Movimiento por la Vida y el conjunto del movimiento social se pudo observar en los actos y marchas de los damnificados de la catástrofe de Armero, en las marchas campesinas y en eventos nacionales como el II Congreso de Movimientos Cívicos que se preparó y realizó bajo el lema "Por el Derecho a la Vida y la Unidad Popular", o como la movilización de cerca de 50.000 obreros en septiembre de 1986 "contra las imposiciones del FMI y por la defensa de la vida".

Las jornadas de noviembre de 1986, que incluyeron marchas, conciertos y actos por la vida, cerraron el ciclo abierto el año anterior después de los hechos del Palacio de Justicia y de Armero y abrieron otro nuevo. Ahora, la perspectiva de este movimiento sigue siendo de continuidad y de ampliación y al mismo tiempo de diferenciación.

Las determinaciones que lo revitalizaron al final del gobierno de Betancur se mantienen con la presidencia de Virgilio Barco. La militarización del conjunto de la situación nacional es un componente destacado de la política de pacificación que ha definido el nuevo gobierno en los marcos de la llamada

“normalización”. La progresión de los enfrentamientos armados y de una situación de guerra en regiones importantes del país, planteará en nuevos terrenos la cuestión del derecho a la vida, del respeto del Derecho de Gentes o de los tratados internacionales para situaciones de guerra interna. Por otro lado, el Estado de sitio no solo se mantiene sino que la campaña contra el narcotráfico es integrada por el Gobierno con las medidas de orden público. Los decretos de Estado de sitio emitidos en diciembre de 1986, en reacción al asesinato del periodista Guillermo Cano, no se dirigen solo contra la mafia que apareció como responsable, sino que configuran un nuevo Estatuto de Seguridad. Otra vez se amplían las competencias de la Justicia Militar; la retención de personas por sospecha, en uso del artículo 28 de la Constitución, tiende a hacerse elemento corriente del ejercicio del poder; se incrementan las penas por porte de armas y se introduce formalmente la recompensa en dinero o en “indultos” a los informantes que ayuden a capturar narcotraficantes o subversivos. En una situación en la que se multiplican los paramilitares, no hay sin embargo disposiciones oficiales para continuar las investigaciones sobre el MAS y otros grupos que según la Procuraduría comprometen a miembros de las Fuerzas Armadas. Por el contrario el nuevo Procurador está introduciendo un estilo y criterios que desvirtúan las investigaciones y posturas de su antecesor Jiménez Gómez.

Los niveles que ha tomado la violencia institucional, la guerra sucia, la violencia del narcotráfico y las situaciones de guerra interna, han conducido a que 1987 sea proclamado como Año por la Vida, simbolizando el lugar central de esa preocupación nacional. La vinculación de intelectuales, periodistas y organizaciones de masas, al lado de los incansables pilares de Defensa de los Derechos Humanos (ASFADES, CSPP, CPDDH), indica la renovada ampliación de ese movimiento por la vida.

UNIDAD EN EL MOVIMIENTO SOCIAL

En los últimos años, especialmente entre 1982 y 1986, se ha desarrollado en Colombia uno de los procesos más profundos de unidad y reorganización en el movimiento obrero y popular —cívico, sindical, estudiantil, campesino, indígena— de las últimas décadas.

La s
exce

Septi

Octub

Febrer

Abril

Mayo

Junio

Agosto

Noviem

Julio

Septien

Septien

Noviem

Cada se
por sus
los año
formaci
CUT, h
de la m
ideológi
popularPara un
miento

La sola cronología de eventos nacionales lleva a pensar en la excepcionalidad del período de reorganización:

Septiembre	1981.	Paro Cívico Nacional.
	1982.	I Congreso Nacional Indígena; Fundación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.
	1982.	VIII Congreso Nacional Comunal. Formación de Comisión Nacional de Seguimiento (Pro-autonomía).
Octubre	1983	I Congreso Nacional de Movimientos Cívicos. Se crea la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos.
Febrero	1984	Encuentro Nacional Agrario; se forma la Coordinadora Nacional de Organizaciones Agrarias de Colombia.
Abril	1985	Encuentro Nacional de Organizaciones Populares. Comisión del Paro Cívico Nacional.
Mayo	1985	Encuentro Ecológico Nacional.
Junio	1985	Paro Cívico Nacional.
Agosto	1985	I Congreso Unitario de Vivienda. Se formó la Coordinadora Nacional Unitaria de Vivienda Popular.
Noviembre	1985	IX Congreso Comunal. Se forma la Comisión Nacional.
Julio	1986	II Congreso de Movimientos Cívicos y Organizaciones Populares. Se forma el Consejo Nacional Popular.
Septiembre	1986	Congreso Constitutivo de la Central Nacional de Organizaciones de Vivienda Popular.
Septiembre	1986	Formación del Comité de Unidad Agraria Nacional.
Noviembre	1986	Congreso de Fundación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.

Cada sector social o movilización popular ha estado marcado por sus peculiaridades, más sin embargo esa reorganización de los años ochenta que ha tenido sus hitos más destacados en la formación de la ONIC, del Consejo Nacional Popular y de la CUT, ha sido resultado y componente del auge de conjunto de la movilización y de la búsqueda de superación de la crisis ideológica y de conducción política en los sectores obreros y populares.

Para una interpretación de las tendencias actuales del movimiento popular, conviene apreciar esa interdependencia entre

Movilización-reorganización y redefinición ideológica. Son tres componentes del desarrollo del movimiento social y político que interactúan entre sí. La movilización y la experiencia colectiva que en ella se construye, son fundamentales para los desarrollos orgánicos y de conciencia. Los niveles de coordinación/centralización, definen en mucho las posibilidades de la acción de masas y los alcances de las reivindicaciones o programas. Los grados de comprensión sobre los propósitos de la lucha, o los objetivos y características de los instrumentos orgánicos, son decisivos para establecer los alcances del conjunto del movimiento social o político. En esa compleja relación es difícil establecer una jerarquía independiente de las condiciones concretas. El despliegue de fuerza en la acción es condición esencial para el cambio en el cuadro social y político general, pero la conciencia colectiva y las características de la dirección dan la proyección histórica y los contornos de "nuevos poderes" o de poder popular.

La relación temporal de la tríada mencionada, es igualmente compleja. El auge de masas no puede darse de manera ininterrumpida. Una movilización puede conducir a situaciones nuevas de correlación de fuerzas y de poder, que perduran más allá del momento de la acción. En ese nuevo estadio de procesos de coordinación que se construyeron en los momentos de confrontación y los organismos de todo nivel, pueden servir de base para centralizaciones y definiciones programáticas de mayor alcance. Los saltos orgánicos se sustentan en la trama de relaciones, microorganismos, liderazgos, experiencia y reflexión que ha estado asociado a la movilización en el período (aunque no exista correspondencia en la coyuntura).

Desde esta línea de razonamiento es que en el análisis del desarrollo organizativo resaltamos como determinantes el ascenso de la acción directa de masas, esa acción extrainstitucional de los años 80, y los cambios que se producen en la vía de superación de la crisis ideológica de la izquierda tradicional.

EL CONGRESO CIVICO Y LA CUT

Los eventos más importantes de 1986, ilustran esta afirmación. El II Congreso de Movimientos Cívicos y Organizacio-

nes Populares, realizado en Bogotá en julio de 1986, con sus 3.000 delegados fue el Congreso de los congresos efectuados durante el cuatrienio, fue la síntesis del proceso de lucha del movimiento cívico que incluye desarrollos como los de los viendistas, comunales, ecológicos y se integra con las dinámicas sectoriales campesinas e indígenas. Entre uno y otro componente hay por supuesto desigualdad tanto en los alcances de la acción como en lo organizativo. Sin duda los paros cívicos por un lado, y las recuperaciones de tierra de los indígenas y algunas zonas campesinas, por el otro, han sido en estos años la locomotora del conjunto; esto no niega que en momentos específicos hayan sido lo más notable las marchas campesinas o que unos y otros se hayan enriquecido en el impulso del movimiento democrático por la vida. También en lo organizativo, las coordinaciones regionales y nacionales del movimiento cívico y las de los indígenas, constituyeron jalones para que se vislumbrara la posibilidad de otras centralizaciones parciales y de una coordinación nacional de conjunto.

La Central Unitaria de Trabajadores, es el resultado de muchos factores, pero en lo inmediato fue el resumen de elementos como los siguientes:

- Desarrollo de la movilización y el movimiento huelguístico, especialmente en sectores como el magisterio, trabajadores del Estado, bancarios y algunas grandes empresas fabriles. La CUT no se puede ver desligada del impacto que ha producido en los viejos aparatos burocrático-sindicales el incremento de la presión de base para resistir a los planes de austeridad de los patrones y del Estado, ni tampoco se puede disociar de la experiencia y maduración de los trabajadores que participaron o fueron testigos ausentes de los Paros Cívicos Nacionales.
- La crisis de la conducción burocrática del sindicalismo y de los esquemas economicistas ("plieguistas"), se expresa tanto en el sindicalismo independiente que aparece como el más dinámico, como en la CSTC que se muestra estancada. En reacción a esa crisis algunos sectores propician modalidades de acción y coordinación que tratan de vincular al sindicalismo a los problemas del país y que buscan sacarlo del estrecho horizonte de la negociación salarial.

Crisis del Frente Sindical Democrático promovido por los sectores más ligados a los partidos tradicionales y a la Embajada de Estados Unidos y crisis de la UTC y CTC, las dos centrales que lo sustentaban. Esa crisis se mostró con toda su magnitud en 1985 y 1986 como resultado de la conciliación con el Gobierno y su "pacto social" para aplicar la política del FMI; se tornó explosiva cuando se enfrentaron en la UTC los agentes más connotados del Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, con los agentes del Instituto Shiller y aliados de simpatía socialdemócrata. En la CTC la crisis estalló en el Congreso de 1985 cuando la burocracia más antigua y corrupta fue superada por una corriente democrática y nacionalista (Renovación).

- El avance en el fortalecimiento o fundación de Federaciones por rama y de sindicatos únicos nacionales, ha sido uno de los fundamentos claves de la CUT. En este plano sobresalen las experiencias de la Federación Colombiana de Educadores y la de la Unión de Trabajadores de Santander. En estas organizaciones se puso en práctica un nuevo estilo de acción sindical y de relación entre sectores políticos distintos, superando la tradición que llevaba a cada partido o corriente a formar su aparato, su federación o la central controlada desde arriba.
- En la dimensión organizativa, existen antecedentes que facilitan la confluencia en la CUT. Entre ellos están, por ejemplo, la formación del Consejo Nacional Sindical con participación de las centrales nacionales existentes y que llamó al Paro Cívico de 1987; aunque ese consejo desapareció rápidamente, alimentó la idea de la unidad y coadyuvó a que desde hace una década todos los congresos y todas las plataformas sindicales hablen de la necesidad de una central única o de una central unitaria. Ultimamente estaba funcionando de manera precaria una comisión de unidad con la participación de los agrupamientos del sindicalismo independiente y de la CSTC: Esta comisión había llegado a un punto muerto que indicó a un sector de FECODE y USITRAS y a algunos del sindicalismo independiente que la única posibilidad de desbloquear el proceso de unidad y renovación era buscando nuevas posibilidades hacia la UTC y la CTC.

A todo lo anterior se agregó la perspectiva de persistencia de la política antiobrera durante la administración Barco, que está unida a tendencias muy fuertes de recomposición del capital y de la empresa a escala mundial.

El fortalecimiento de la fracción socialdemócrata dentro de la UTC sirvió de puente para la confluencia con las corrientes más democráticas dentro del sindicalismo independiente y desde este punto de apoyo para la alianza con la CSTC y otros sectores.

No obstante los saltos extraordinarios en la centralización de los movimientos cívicos y populares o en el movimiento sindical, se trata de un proceso en desarrollo o de una situación transitoria en la que tendencias encontradas procuran definir el rumbo de los nuevos organismos. La CUT surge como una realidad más consolidada, no obstante que el proceso de su conformación fue veloz en la fase decisiva y *a pesar de haberse dado mediante acuerdos por arriba sin suficiente participación de las bases*. La CUT se sustenta en Federaciones o sindicatos existentes desde tiempo atrás, con aparatos dados, legalmente reconocidos y liderazgos y hasta burocracias delimitadas. La influencia de organizaciones y corrientes políticas, puede incluso cuantificarse exactamente en sus organismos de dirección y en cada uno de sus componentes. En el movimiento cívico la situación es distinta; la centralización nacional se propone cuando los organismos de base, regionales o sectoriales apenas están *haciendo sus primeras pruebas de existencia o tratando de superar la condición de coordinaciones coyunturales de acciones locales*. Las diferencias entre uno y otro proceso se observan en los entes nacionales que fueron formados en 1986. La CUT aparece con una dirección que se presenta de inmediato como interlocutor del Gobierno para negociar condiciones económicas o propuestas de manejo del país; a pocas semanas de su fundación ya estaba llamando a movilizaciones nacionales; el Consejo de Organizaciones Populares, en cambio no logra constituirse realmente seis meses después de haber sido acordado por el Congreso. Los organismos cívicos no están aún formalizados y se resisten a caber en la matriz de las Juntas Comunales que han servido por décadas para atar grupos o líderes de barrios o veredas a las maquinarias de clientela de los partidos tradicionales o a la intervención y control estatales.

TEMAS DE UNIDAD Y DISCUSION

Con todo y las diferencias, en el sindicalismo y en los movimientos populares de otro tipo, este período de acciones de masas y redefiniciones organizativas, ha estado acompañado de énfasis sobre temas que ilustran el derrotero de la reflexión entre los activistas o militantes que han estado al frente del movimiento social. Entre esos temas, viejos y nuevos, resaltaron algunos haciendo un breve comentario.

Autonomía e independencia respecto del Estado

"Ratificamos que el movimiento popular mantendrá su independencia y autonomía frente al Estado y sus instituciones". (Declaración del II Congreso de Movimientos Cívicos y Organizaciones Populares. Bogotá, julio de 1986)²².

"La CUT es una organización independiente del Estado, de las instituciones religiosas, de los patronos y de los partidos y movimientos políticos. En consecuencia la CUT será autónoma para definir las políticas con que orientará las luchas de los trabajadores. . ." (Declaración de Principios de la CUT. Bogotá, noviembre de 1986)²³.

No se trata de las viejas discusiones procedentes del siglo pasado sobre la relación entre los sindicatos y organizaciones de masas con los partidos o con el Estado. El problema concreto que está en la base de la reiteración constante de la Autonomía de los movimientos y organizaciones está en que el auge de los años ochenta puso en crisis los obsoletos instrumentos de control por parte de los partidos oligárquicos y del Estado y frente a las nuevas formas se percibe a primera vista la tensión entre la contraofensiva institucionalizadora y de cooptación y la búsqueda de condiciones de existencia de las organizaciones que se forman o transforman, para no perder su potencial ni su poder. La reafirmación de principios generales como el de autonomía, tiene el sentido político de delimitar

22 Declaración del II Congreso.

23 Declaración de Principios de la CUT, mimeo, Bogotá, noviembre de 1986.

fronteras con los partidos tradicionales y también con prácticas burocráticas de partidos y grupos de izquierda que pretenden imponer su régimen interno monolítico, ultracentralista y vertical a las organizaciones de masas. Pero de manera muy especial se ha reiterado en la independencia con respecto del Estado, buscando debilitar el control antidemocrático que es propio del sistema político colombiano. Así por ejemplo, el Congreso Nacional de Juntas de Acción Comunal realizado en noviembre de 1985, avanzó elementos para romper la subordinación legal de las 32.000 Juntas que figuran legalizadas con cerca de 5.000.000 de presuntos afiliados, y que dependen del Ministerio de Gobierno y del Departamento Administrativo de Acción Comunal. Los indígenas procuran quitarse la camisa de fuerza de la División de Asuntos Indígenas que le ha servido al Estado para manipular comunidades, mantener el desconocimiento de derechos o tratar de intervenir en la vida de las organizaciones indígenas para alimentar la división o reforzar a los sectores más proclives a la conciliación. La independencia de las organizaciones también es reivindicada frente a entidades nacionales o internacionales que utilizan aportes financieros para programas educativos, investigaciones o gastos de funcionamiento con el propósito de condicionar ideológica y políticamente a los dirigentes populares.

Por otro lado, el énfasis en la independencia de las organizaciones ha sido expresión de la resistencia a la institucionalización que bajo el manto de la descentralización y fortalecimiento de la "democracia local", quiere encuadrar al movimiento cívico y popular en organismos del Estado como los previstos en la Ley 11 de 1986. Por esta vía se expresa un debate en el que se presentan planteamientos extremos como los que centran la atención casi exclusivamente en la participación en las nuevas instancias de "consulta local" o los que excluyen de plano cualquier utilización de esos limitados entes institucionales. Entre uno y otro extremo se presentan muchas tonalidades o combinaciones.

¿Movilización vs. concertación?

"La CUT recurrirá a la movilización como principal forma de lucha, incluida la huelga y practicará la más amplia uni-

dad de acción con las organizaciones populares. . . (Declaración de principios).

“El llamado es a redoblar la acción para defender las propuestas aprobadas, la plataforma de lucha y el pliego que en medio de una gran movilización nacional y regional presentaremos al nuevo gobierno”. (Declaración del II Congreso).

¿Cómo se relacionan las organizaciones obreras y populares con el Estado y con sus instituciones? ¿Se pueden fortalecer concertando o negociando con el Estado? El carácter eminentemente extrainstitucional de la movilización de masas en este período hace volver una y otra vez sobre el tema de la concertación que fue discutido a todos los niveles a propósito de los acuerdos de tregua y diálogo nacional. Para el Estado y sus instituciones la concertación es en efecto una alternativa a la confrontación y vía para comprometer a sectores opuestos en soluciones parciales y que puedan desactivar situaciones críticas. También es un instrumento para la búsqueda de consenso, de cohesión y negociación en el bloque dominante y método para la legitimación de políticas gubernamentales. Hay por lo tanto diversas aproximaciones a la concertación y diferentes niveles de su aplicación. Por ejemplo, el gobierno de Belisario Betancur se presentó, al menos en su primera etapa, como un gobierno de “unidad nacional” que en algunos niveles buscaba apoyarse en el “pacto social” o en los “pactos de paz” o en los acuerdos de austeridad. La misma “apertura democrática” se enunció para ser concertada en comisiones cumbres y otras comisiones *ad-hoc*.

Es ante toda esta problemática que unos sectores identifican concertación con conciliación de clases y *aceptan la negociación solo en el terreno reivindicativo sindical o cívico*. En especial centran su polémica contra los que se convierten en agentes de la política de concertación gubernamental, pero debaten sin diferenciar matices y sin hacer consideraciones tácticas.

En el desarrollo de estas polémicas se ha abierto camino la idea de que la NEGOCIACION es un nivel de concertación o una modalidad peculiar de relación con el Estado o el Gobierno en un momento dado, que *es parte de la movilización y puede servir a su propio desarrollo y al proceso de organiza-*

ción y maduración de las masas activas. Se entiende entonces por negociación con el Estado, con el Gobierno o con una de sus instituciones, el momento de relación directa entre voceros de las partes en conflicto para establecer los puntos de acuerdo o desacuerdo sobre las demandas que han sido sustentadas por la movilización o por una organización con potencialidad de acción de masas. La negociación supone el reconocimiento a los interlocutores y expresa correlaciones de fuerza. Los alcances de una negociación no superan el poder social de la clase, sector o grupo que concurre, de allí que sea una ilusión la idea de quienes hacen de la negociación el centro de la acción. Desde el otro ángulo, renunciar a la negociación o reducirle su ámbito solo a lo económico, es equivalente a definir que en el terreno de los derechos democráticos no hay demandas parciales o que basta combinar el economismo con el maximalismo.

La experiencia del movimiento obrero y popular ha mostrado que en la búsqueda de una alternativa de poder, la acción directa, la acumulación organizativa y la experiencia colectiva pueden apoyarse bajo determinadas circunstancias en la negociación. La cuestión no es si se negocia o no, sino cómo, qué y en cuáles circunstancias se hace una suposición.

La democracia

“El propósito principal de la CUT es el de conducir las luchas de los trabajadores y el pueblo colombiano, combinando la defensa de los derechos actuales y la conquista de mejores condiciones de vida y de trabajo, con el combate por alcanzar cambios de trascendencia en las estructuras económicas, sociales y políticas del país, que sean la base para instaurar una auténtica democracia en la cual se garantice la paz con justicia social, el respeto a la vida y los demás derechos humanos de todos los colombianos, el . . . ”. Plataforma de lucha de la CUT.

“La búsqueda de verdaderas libertades políticas y derechos democráticos y de una paz con justicia social han pasado a ser objetivos sentidos del pueblo colombiano”. II Congreso de Movimientos Cívicos.

En todos los programas, plataformas y eventos de los últimos años, la cuestión de la democracia ha tenido un lugar central. Sin embargo, este es uno de los temas más controvertidos que se desdibujan en los documentos de consenso que resultan de la confluencia de posiciones. Fórmulas como las utilizadas en el Movimiento Cívico o en la CUT, no obstante que sitúen como objetivo general "instaurar una auténtica democracia", no alcanzan a corresponder a la importancia decisiva que ha cobrado la lucha por la democracia en el movimiento social y político.

Aún pesan en el movimiento popular las apreciaciones unilaterales de quienes ven la democracia solo como una abstracción o que subrayan la verdad a medias de que ella existe en condiciones concretas como forma de un Estado de Clase y por tanto como instrumento de dominación. Consideran que reivindicar la democracia en general es reivindicar la democracia en sentido táctico, levantando demandas parciales de libertades democráticas para los trabajadores o derechos políticos individuales.

Las posiciones de inspiración reformista se limita a plantear la democracia como ampliación de garantías para la acción política, como la consecución o preservación de nuevos espacios para la organización de los trabajadores y otros sectores sociales, en los marcos de la democracia representativa. Esta acepción toma la democracia como instrumento, como medio para otra cosa que se considera lo estratégico.

Desde otra perspectiva, en el debate ideológico viene ganando terreno la tesis que le asigna a la democracia el papel de eje del programa de acción y cambio. La reivindicación de la democracia se refiere a una concepción del Estado, de la economía y a la organización de la sociedad de conjunto. La realización de la democracia sería el control de los trabajadores manuales e intelectuales sobre las condiciones económicas y políticas de existencia; control que se constituye en lo macro y lo micro, en el Estado y en las unidades básicas del ordenamiento social. La democracia en los medios y en la táctica se corresponde con la democracia en los fines y en la estrategia. Desde este punto de vista la democracia incluye y trasciende los derechos políticos, los derechos del individuo ante el Estado, los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos.

Es un concepto orientador que se traduce en reivindicaciones parciales, demandas y concepciones sobre las formas de ejercicio del poder, sobre la participación de los trabajadores en la toma de decisiones a todos los niveles y por tanto sobre la vida interna de las instituciones estatales, económicas y de las organizaciones sociales o político-partidista. La democracia es condición para el desarrollo de la fuerza productiva de la sociedad y para el desarrollo cultural de los pueblos. En este horizonte es que se adelantan elaboraciones sobre la democracia participativa, la democracia por la base o la democracia socialista.

No puede dejar de llamar la atención el que en las discusiones programáticas que acompañan la reorganización en curso, solo de manera tangencial y excepcional se aborde entre democracia y socialismo o se reivindique el socialismo como objetivo del movimiento social o político y carácter de la nueva estructura social que se busca. Se recurre a los implícitos en los que "instauración de la auténtica democracia" o "cambio social, económico y político, o "nueva Colombia", deja abierta la interpretación particular alusiva al socialismo. El hecho que llama a reflexión es que ningún documento aprobado por las organizaciones que se han constituido durante los últimos años, con excepción de las declaraciones de corrientes políticas como Firmes o de autodefinition socialista democrática, ha incluido referencias al socialismo. Esta situación es correlativa al énfasis en la democracia y obedece a las razones más diversas. El telón de fondo es el descrédito del llamado "socialismo real" como resultado de sus propias contradicciones y de la ofensiva ideológica de los teóricos y políticos neoconservadores y neoliberales. Los acontecimientos de Polonia, la ocupación de Afganistán, lo mismo que la crisis económica de los países del Este y la tendencia a la insubordinación interna en algunos de ellos han colocado a la defensiva no sólo a los partidos comunistas aliados de la URSS, sino a todas las corrientes que se reivindican del movimiento obrero y del marxismo. El impacto ideológico de la crisis del "modelo soviético" no ha logrado ser contrarrestado desde una perspectiva marxista revolucionaria, planteando problemas que solo podrán ser superados definitivamente por la praxis de nuevas revoluciones triunfantes.

En las elaboraciones programáticas que se vienen haciendo en Colombia, el planteamiento de la democracia subsume enton-

ces al socialismo y en el auge de los paros se identifica con él en su plena realización. Es también frecuente que se piense que la reivindicación consecuente de la democracia, no puede sino conducir a la revolución social y política. El programa de la "auténtica democracia", es la palanca para el "auténtico socialismo".

PLAN DE DESARROLLO ALTERNATIVO

"Los documentos y programas de congresos y eventos realizados en los últimos años por organizaciones que concurren al II Congreso y por otras organizaciones sociales, políticas y democráticas, muestran que los sectores populares vamos configurando un programa alternativo de solución a los fundamentales problemas del país". Declaración del II Congreso de Movimientos Cívicos y Organizaciones Populares.

"El Congreso Constitutivo de la CUT llama a todos los trabajadores, a las organizaciones campesinas, a las organizaciones cívicas y comunales, al movimiento por la vivienda, a las agrupaciones de mujeres, a los trabajadores del arte y la cultura, a todos los sectores afectados por la crisis y por el modelo de acumulación económica, a unificar esfuerzos en la elaboración e impulso al plan de desarrollo alternativo del cual los trabajadores que damos el gran paso de constituir la CUT, presentamos esta propuesta a la discusión general" . . . "Los esfuerzos que se hagan para abrirle paso al Plan Económico Alternativo que se esboza, tienen que confluír en instancias e instituciones de unidad y poder de los trabajadores".

Documento sobre la "Situación nacional y propuesta de la CUT sobre Plan Alternativo de Desarrollo Económico y Social". Congreso de Fundación²⁴.

Estas extensas citas ilustran hasta qué punto los dirigentes sindicales y cívicos se plantean la superación del inmediatis-

24 La situación económica y propuesta para un Plan Alternativo de Desarrollo Económico y Social. Aprobado por el Congreso de Fundación de la CUT, mimeo, Bogotá, noviembre de 1986.

mo y de las plataformas mínimas y contestatarias. Es evidente que la conciencia política de los sectores populares no ha integrado de la misma manera esa preocupación por una alternativa global y un programa para el cambio social, más sin embargo, el que *los activistas más destacados* asuman la tarea de presentar un Plan de Desarrollo Económico y Social, en confrontación con los que se formulan desde el Gobierno, es una vía novedosa en Colombia para la constitución de una dirección capaz de convocar a los trabajadores y oprimidos. El sentido de ese llamamiento va hacia la elaboración de un programa gubernamental, como lo indica la misma CUT, cuando afirma que "los trabajadores nos planteamos la necesidad de asumir la dirección económica, ante la incapacidad comprobada de los directores tradicionales de la economía nacional".

Si se toman en detalle los documentos de los congresos y luchas de los últimos años, se constata que efectivamente se ha llegado a una nueva concepción de lo que deben ser las plataformas y programas. El reconocimiento de las limitaciones en la lucha salarial o por servicios públicos han llevado a algunas capas a plantearse la necesidad de abordar las cuestiones políticas decisivas y los problemas del poder. La escala sectorial o local se reconoce insuficiente y la lucha parcial demasiado volátil; si no se abordan los problemas macro y no se interviene en los centros de decisión.

Si se toman estos propósitos de ordenamiento de la lucha en torno a un Plan de Desarrollo Alternativo en relación con los obstáculos que se interponen en su consecución, con seguridad se puede hacer una larga lista. La situación al respecto es desigual entre sectores, en buena medida esta intención de superación del pliegusmo es inducida por intelectuales y un grupo de dirigentes; algunas organizaciones y movimientos importantes se mantienen identificados alrededor de plataformas reivindicativas inmediatas mientras en la elaboración de propuestas predomina la dispersión y hasta el eclecticismo como se observó en varias comisiones del II Congreso de Movimientos Cívicos. Pero no obstante todos estos obstáculos, o mejor, precisamente porque las dificultades son tantas, es que adquiere importancia de mayor envergadura la iniciativa de dotar a las organizaciones sociales de mayor representatividad en el país, de un Plan Alternativo.

ALTERNATIVA DE PODER

“ . . . Al llegar al umbral de otro siglo encontramos que las modernas clases dominantes y el sistema de coloniaje disimulado de otro imperio, han sido incapaces de responder a los anhelos de bienestar y de libertad; encontramos que es preciso asumir la elemental realidad histórica que dice que *solo el pueblo, los desposeídos y oprimidos, podrán constituirse en el sujeto para la construcción de una nación independiente y soberana*, sustentada en los profundos cambios que nos puedan hacer libres de las cadenas económicas y políticas en una nueva Colombia”. Declaración del II Congreso de Movimientos Cívicos y Organizaciones Populares.

¿Por qué en las elaboraciones de consenso que se vienen haciendo no aparecen objetivos gubernamentales? ¿Las organizaciones sociales deben limitarse a presentar propuestas, reivindicaciones o planes alternativos para presionar su ejecución por parte del Gobierno establecido? ¿El movimiento social debe plantearse el objetivo de contribuir a la constitución de una Alternativa de Poder y de una opción gubernamental y estatal?

Todos estos interrogantes han estado presentes sin que su resolución haya permitido que, con respecto a la antiquísima cuestión del poder y del Estado, se logren acuerdos que trasciendan las generalidades.

La ausencia de formulaciones programáticas gubernamentales, para algunos obedece a la necesidad de distinguirse entre organizaciones sociales y organizaciones políticas como si los objetivos a ese nivel de la constitución de un nuevo gobierno, que se sustente en un bloque hegemonizado por los trabajadores, fuera privativo de los partidos u organizaciones partidarias. Para otros tal ausencia se explica por conveniencias tácticas, correlaciones de fuerzas o estado de la situación del país.

En todo caso, el recurso de frases elípticas cuando se alude al poder es resultante de la incidencia de corrientes disímiles que coinciden en que pueden coexistir dentro de una misma organización de masas, manteniendo el debate sobre estos asuntos o dejándolo en suspenso.

A estos temas que aquí apenas esbozamos se le agregan otros de importancia en las discusiones programáticas que acompañan la reorganización que está en curso en el movimiento obrero y popular. Quizá el más relevante y menos discutido abiertamente es el de la relación entre movimientos sociales y movimientos políticos y el que toca con la lucha armada. Es apenas obvio que un problema de esta naturaleza es difícil de abordar en las organizaciones de masas en condiciones de polarización y crecientes enfrentamientos militares. Lo que se ha generalizado al respecto es la definición de autonomía de las organizaciones de masas y la demanda de respeto a las organizaciones armadas a la dinámica particular de la movilización civil.

LAS POSIBILIDADES

Todas estas consideraciones sobre los procesos de unidad, sobre el curso de la acción y de la elaboración política, son las que sustentan la tesis de que el movimiento popular en Colombia se encuentra en un momento particular de redefiniciones y que ellas se desarrollan vertiginosamente en las organizaciones de carácter social y también, aunque a ritmo menor, en el terreno del surgimiento de alternativas políticas de masas.

A los espíritus contemplativos y a los escépticos, o tal vez a otros curtidos por la experiencia y por proyectos fallidos, se les puede presentar rutinaria esta situación y demasiado alucinada la visión que pone todos los acentos en los aspectos que aparecen más dinámicos o en los que encierran las posibilidades actuales para superar la ya crónica ausencia o debilidad de alternativas para la lucha por la transformación de esta sociedad.

La apreciación realista de las tendencias del movimiento popular y de sus posibilidades no puede dejar de tener en cuenta la acción de las fuerzas contrarias ni los obstáculos internos. La exageración de las dificultades es la fuente del escepticismo y del inmovilismo, pero la disminución de sus alcances alimenta la desesperanza en el futuro inmediato. No es impertinente entonces tener presente la capacidad de reacomodo que ha exhibido la clase dominante colombiana a lo largo de este siglo y que continúa mostrando ahora. La refor-

ma del Estado desde arriba no deja de tener eficacia en su propósito integrador. Los partidos tradicionales intentan fórmulas de modernización para revitalizarse y hasta renovarse generacionalmente. Los más decepcionados entre la intelectualidad de izquierda se acomodan en puestos oficiales o en corrientes prometedoras de los oficialismos. El viejo clientelismo le cede parte de su sitio al clientelismo con computador. Se renuevan las dotaciones y tácticas militares y los discursos de los presidentes o de los prescindibles de los partidos del orden. Democracia representativa formal, con Estado de sitio permanente, se combinan con militarismo redoblado para tratar de encontrar el punto de equilibrio que le brinde a las clases dominantes legitimidad y control. El bipartidismo mantiene el monopolio electoral con el 95% de los sufragios y no presenta por el momento fraccionamientos sino procesos convergentes en cada partido. La economía está en una situación manejable para el capital, y el Gobierno tiene cuentas de crédito abiertas en los bancos de Washington. Y por otro lado, dentro de las organizaciones obreras y populares, el proceso de redefinición no logra aún superar serios obstáculos. Es grande el peso del localismo e inmediatez; el movimiento cívico no supera la acción coyuntural; el sindicalismo agrupa menos del 15% de los asalariados y arrastra el lastre de pequeñas y grandes burocracias que solo atienden pliegos salariales.

Pero precisamente en ese contexto es que adquieren importancia los nuevos procesos que se vienen dando en el movimiento social y político y que se apoyan en una situación nacional fuera de lo corriente. Como en el cuento de García Márquez, al mirar los acontecimientos de los últimos dos años no podemos menos que exclamar que "Algo va a ocurrir en este pueblo". Estamos en la gestación de una nueva situación y así lo han indicado hechos que se han acumulado en corto lapso: varias treguas entre la guerrilla y el Gobierno; varias guerras que siguen su curso, crisis en las instituciones y reacomodos en las alturas; gobiernos que se deterioran en pocos meses y pierden credibilidad sus promesas de cambio, auges y recesos de los movimientos cívicos y luchas extrainstitucionales; aparición de agrupaciones político-militares como el Quintín Lame, Patria Libre o PRT que se agregan a otras más antiguas para formar la Coordinadora Nacional Guerrillera; viejas guerrillas que en tregua forman movimientos políticos y mientras unos limpian fusiles otros eligen concejales y parlamenta-

rios; reagrupamientos en el sindicalismo con la fundación de una central que reúne al 70% de los sindicalizados y que se escapa del control de los partidos tradicionales; decenas de coordinadores populares nacionales que pugnan por sobrevivir y plantear alternativas y propuestas políticas y movimientos que se proponen ser opciones de masas ante el bipartidismo y la izquierda tradicional.

La evolución que se viene registrando en el movimiento social y en las organizaciones de masas, indica el desarrollo de nuevas formas de relación con las organizaciones políticas. Lo más notable es la pérdida de influencia de los partidos políticos tradicionales que hasta hace unos años tenía control sobre sectores considerables del sindicalismo y manipulaban a su arbitrio las Juntas Comunales. La incidencia de esos partidos continúa siendo importante sobre todo en los engranajes de la clientela electoral, pero la tendencia es al progresivo debilitamiento. La movilización popular de los años ochenta y en particular la que de diferente manera se desenvuelve en la acción directa, fue factor clave para precipitar la crisis de las organizaciones nacionales de izquierda que tomaron como ejemplo exclusivo la actividad parlamentaria o electoral. La movilización de los años ochenta ha acelerado los replanteamientos políticos que se producen no solo por circunstancias nacionales sino como parte de un reordenamiento que opera a nivel internacional.

El rasgo general es que, siguiendo la trayectoria del movimiento social, en estos años se acentúan los procesos políticos que convergen hacia la formación de nuevos movimientos o partidos. Durante esta década, la guerrilla ha ganado espacio al interior de ese proceso, no obstante las oscilaciones que presenta en su influencia entre la población; pero existe una amplia franja que viene rompiendo con los partidos tradicionales y que en las condiciones actuales no encuentra su opción política en la guerrilla o en la perspectiva insurgente. La existencia de esta situación en capas significativas de la población, señala las posibilidades de surgimiento de movimientos alternativos. Por lo pronto varias corrientes procuran proyectarse en ese espacio, como puede observarse en la iniciativa de la Unión Patriótica, en los Movimientos Políticos Regionales, en la Constitución del Comando Político Nacional de los Trabajadores formado por un importante sector de la

CUT, en el llamamiento a formar una Alternativa Democrática y Popular que vienen propiciando varias organizaciones, o en el planteamiento de la Convergencia Nacional que impulsan otros. En todo caso una Alternativa de masas al bipartidismo es una posibilidad que aparece alcanzable en la situación actual colombiana.

* S
c

El a
la e
año:
solic
Ana
surg
eclíp
un r
cara
bajo
asun
te p
lució
flicte
se er
de p
flicte